

DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA

LA INVENCIÓN DEL CONTENEDOR Y LA
TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS JURÍDICO

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS

CUEJ

M.R.

PARA ESPECIALISTAS, ENTRE ESPECIALISTAS

EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR EXHORTO: DE LA CDMX AL
EDOMEX: UN ATENTADO CONTRA LA JUSTICIA

Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo

PLATAFORMAS DIGITALES ¿ES NECESARIA UNA
REGULACIÓN LABORAL?

Mtro. Enrique Bautista Paz

LA INFLACIÓN COMO NUNCA EN 40 AÑOS

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

LA LOGÍSTICA FUNCIONAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Dr. Héctor Díaz Arzola

BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SENTENCIA FIRME
COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE LA
INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL, ESTABLECIDA
EN EL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS

Mtra. Thelma Elizabeth Merino González

@RevistaCUEJ /CUEJREVISTA

www.revistacuej.com.mx

ABRIL - JUNIO 2022

\$ 120.00 020



042016112313103600102

Contenido

- 05** **LA INVENCIÓN DEL CONTENEDOR Y LA TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL**
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
- 09** **EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR EXHORTO, DE LA CDMX AL EDOMEX: UN ATENTADO CONTRA LA JUSTICIA**
Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo
- 15** **LA INFLACIÓN COMO NUNCA EN 40 AÑOS**
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina
- 19** **PLATAFORMAS DIGITALES ¿ES NECESARIA UNA REGULACIÓN LABORAL?**
Mtro. Enrique Bautista Paz
- 22** **YA SE VIVE LA CIENCIA FICCIÓN EN LA REALIDAD Y EL DERECHO, MIENTRAS TANTO, ANQUILOSADO**
Dr. Víctor Amaury Simental Franco
- 25** **RÉGIMEN LABORAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN**
Mtro. Magdalena Villanueva Flores
- 29** **BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SENTENCIA FIRME COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**
Mtra. Thelma Elizabeth Merino González
- 35** **PATENTES A MEDICAMENTOS, UN OBSTÁCULO ANTE LA PANDEMIA DE SARS-COV-2 (COVID-19)**
Mtro. Gerardo Hurtado Razo
- 39** **OPCIONES FISCALES PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PERSONAS FÍSICAS**
Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado
- 42** **LA LOGÍSTICA FUNCIONAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**
Dr. Héctor Díaz Arzola
- 45** **DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA COMO ESENCIA AL DEBIDO PROCESO**
Mtro. Jacobo León Silva
- 50** **NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDAS EN CASILLAS Y DE ELECCIÓN EN MATERIA ELECTORAL**
Mtra. Dafne Rosales Rodríguez
- 54** **LA CRISIS DE LOS CONTENEDORES Y LA NUEVA REALIDAD DEL MUNDO**
Dr. Carlos Alfaro Miranda

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

DIRECTOR DEL CONSEJO EDITORIAL

Dr. Dante Jehová Cisneros García

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Hadar Moreno Valdéz

Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Dra. Sara Esteban Cabrera

EDICIÓN Y ARTE

COORDINADORA DE ARTE

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO

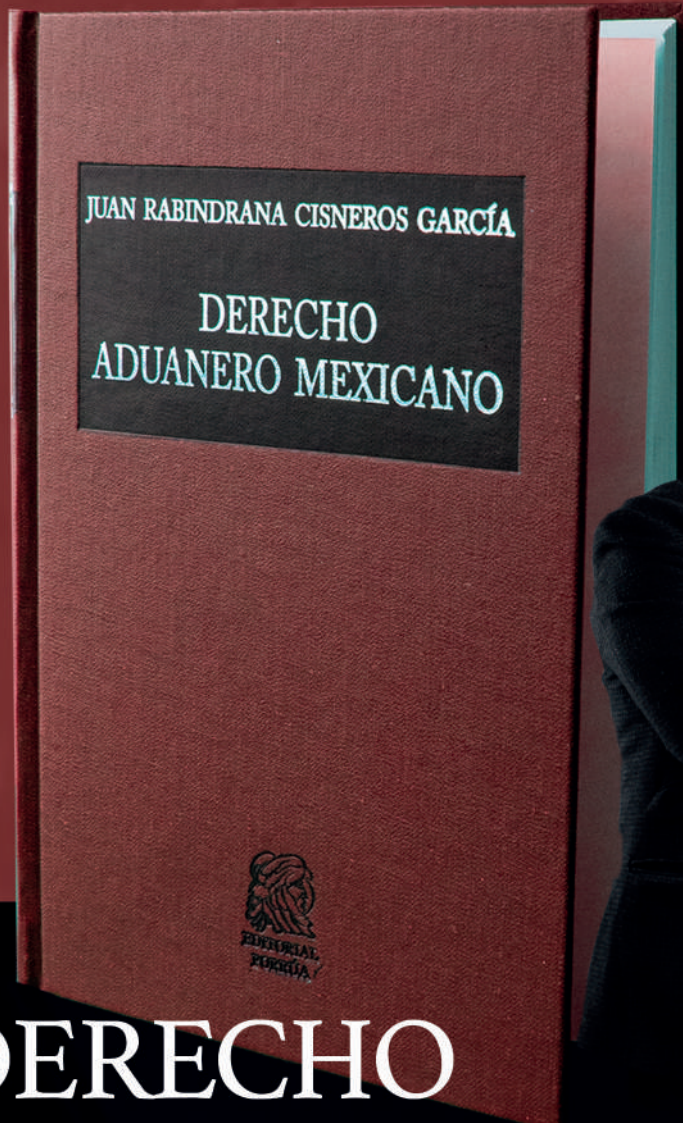
Lic. Liliana Andrade Gutiérrez

CORRECTORAS DE ESTILO

Rosa Elena Cruz Ramos

Sandra Sofía Cisneros Grosso





DERECHO ADUANERO MEXICANO

4ta. Edición

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García



EDITORIAL
PORRÚA

ecex
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

EDITORIAL

Los vertiginosos acontecimientos del día a día, más que cambiar la realidad, nos cambia a nosotros y, por supuesto, a nuestro entorno. Nadie habría imaginado que un día, a alguien se le ocurriría hacer una caja enorme para transportar mercancías por todo el mundo.

Cambios así, tan discretos, pero ruidosos, ocasionan que nuestra sociedad evolucione a pasos agigantados. En los años treinta sólo Aldous Huxley imaginó que, algún día, se podrían tener *hijos a la medida*. Así, el Derecho, por consiguiente, también ha tenido vuelcos y reveses, para poder regular (en la medida de lo posible) aquellas situaciones que, de alguna manera, lesionen los derechos del otro.

Así, fue que han surgido lo que todos conocemos como *medios de defensa*, por ejemplo, el tan aclamado *amparo*. Pero, no por ser tan famoso, hablado y socorrido se escapa de los fenómenos sociales; cosas que, no estando previstas, ocurren. Porque, así suele ser todo.

En esta entrega de Revista CUEJ encontrará el lector un gran abanico de situaciones reales y poco comentadas tan acuciosamente, como los autores lo plasman aquí. En medio de una pandemia que parece no tener fin, una inflación *nunca antes vista* y con avances tecnológicos al alcance del celular, usted se detendrá a ver y reflexionar el cambio, ya que *si bien el instante dura, todos los tiempos están contenidos en él*.¹

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ)
Ciudad de México, abril de 2022.

¹ Concheiro, Luciano, *Contra el tiempo, Filosofía práctica del instante*, México, 2016.



Incluye **códigos QR** con **formatos descargables** y **vídeos** de apoyo al lector.

CUEJ
CENTRO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS JURÍDICOS



Derechos Humanos y Amparo

en Materia Administrativa

2da. Edición

LA INVENCION DEL CONTENEDOR Y LA TRANSFORMACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), exfuncionario en cuatro ocasiones de la Administración General de Aduanas, miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de los libros: *Derecho aduanero mexicano* (editorial Porrúa), *Manual práctico de amparo contra el embargo de mercancías* (editorial Cencomex) y coautor de los libros: *Derecho procesal fiscal y aduanero* y *El Sistema Nacional Anticorrupción* (ambos de Tax Editores), *Derechos humanos y amparo en materia administrativa* y *El agente y la agencia aduanal* (ambas de editorial CUEJ); coordinador del libro *T-MEC Comentado* (editorial CUEJ).



Hace un par de semanas un buen amigo me hizo el favor de regalarme un libro formidable llamado *La caja*, cómo el contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande, escrita por Marc Levinson y traducida al español por Mayra Ortiz de Zarate Silva, publicado en México por Fernando Ramos Casas en 2015.

El contenedor impactó en un primer momento, el comercio por vía marítima y la forma en que tradicionalmente se cargaba y descargaba un barco.

El 26 de abril de 1956 el estadounidense Malcom Purcell Mc Lean inventó el contenedor; así, utilizando una grúa colocó 58 cajas de aluminio a bordo de un barco en Newark, Nueva Jersey y 5 días después llegó a Houston, Texas, dando así paso a la nueva era del contenedor.¹

Antes de la invención del contenedor las empresas se colocaban preferentemente en los puertos contratando a muchas personas para poder cargar y descargar los barcos. Multitud de personas acudían diariamente a cargar y descargar barcos, en situaciones muchas veces criticables por los bajos salarios y las condiciones extenuantes e inseguras.

Es sabido que la mayoría de las grandes ciudades se encuentran en están los puertos, tal como Nueva

York, Hong Kong, Liverpool, por citar sólo algunas. Al inventarse los contenedores y las grúas que cargan o descargan un barco, todo cambió. Ya no es necesario tener la fábrica cerca del puerto, ya que los modernos medios de transporte hacen más eficiente, barato y práctico el transporte de las mercancías.

En efecto, a partir de la era del contenedor, las grúas de alta velocidad y capacidad se desarrollaron y todos los medios de transporte tuvieron que adaptarse a este nuevo medio de transportar las mercancías. Como sabemos hoy en día los tractocamiones y los trenes tienen plataformas para transportar dichos contenedores.

“ Con el contenedor se abarató el transporte de las mercancías y, al hacerlo, cambió la economía mundial. Los ejércitos de trabajadores mal pagados y mal tratados que solían ganarse la vida cargando y descargando barcos en todos los puertos del mundo dejaron de existir; al igual que sus comunidades a la orilla del mar: Las ciudades que habían sido centros de comercio marítimo durante siglos, como Nueva York y Liverpool, vieron como sus áreas portuarias decaían con rapidez,

¹ LEVINSON, Marc, *La caja. Cómo el contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande*, traducido por Mayra Ortiz de Zárate Silva, editado por Fernando Ramos Casas, México, 2015.

inadecuadas para el tráfico de contenedores, o se volvían simplemente innecesarias. Los fabricantes que habían soportado altos costos y plantas urbanas anticuadas con tal de estar cerca de sus proveedores y sus clientes mudaron sus establecimientos.² ”

Recientemente acudí al puerto de Manzanillo, en el estado de Colima y al ver las casas cercanas a la aduana pude observar que se trata de casas muy sencillas, donde vive mucha gente, sin relación o vinculación alguna con la aduana. Las grúas sustituyeron a las personas, y a pesar de que todos los días desembarcan muchos contenedores en ese puerto, la mayoría de sus habitantes no tienen relación alguna con la operación aduanera. Es otro caso donde los inventos desplazan a las personas.

Pero gracias al contenedor el comercio mundial creció y dio paso a los grandes buques cargueros y un sistema de transporte más rápido, barato y eficiente, con menos mermas, mercancías dañadas y robos. En la actualidad, para el transporte marítimo son utilizados comúnmente los contenedores de 20 pies y de 40 pies, aunque hay más grandes.

Como dato interesante, los contenedores de 20 pies se les denomina TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit). Estas siglas se refieren a la capacidad esencial de medida de transporte marítimo referida en contenedores de carga. Los contenedores de 40 pies se les llama FEU.

El TEU se usa en múltiples contextos: desde determinar la capacidad de carga de un buque portacontenedores, hasta calcular la actividad portuaria.³

La globalización y la producción en masa de productos electrónicos, electrodomésticos y automóviles hizo posible la venta a gran escala de estos productos tan deseados por las personas de todo el mundo.

En el libro *La caja* se narra cómo hubo una gran oposición a su implementación, incluso hubo una problemática en torno al tamaño que debería tener el contenedor. Los había de 10 pies, 20 pies, 30 pies, etc., posteriormente los países se pusieron de acuerdo

para homologar los tamaños y hacer posible la estandarización de los medios de transporte a 20 y 40 pies. Su utilización en comercio internacional fue difícil.

Una publicación en el New York Times del 1 de abril de 2021, escrita por Niraj Chokshi, indica que el comercio global ha hecho necesario que cada vez haya más y mejores barcos. *Los buques portacontenedores crecieron demasiado, haciendo referencia al atasco del barco carguero Ever Given, que puede transportar hasta 20,000 contenedores: El atasco en el Canal de Suez demostró que lo más grande no siempre es mejor.*

En referencia a lo anterior se conoce que hoy en día los barcos de última generación pueden cargar hasta 24,000 contenedores. Los puertos han tenido que acondicionarse y hacerse más profundos a fin de poder recibir barcos cada vez más grandes.

Así la invención del contenedor transformó el mundo y el comercio entre los países.

Es increíble pensar que, una caja de acero o aluminio, con una sola entrada y con piso regularmente de madera, fue inventado hasta a penas el siglo pasado. Una idea sencilla, pero que transformó el mundo.



² Op. Cit.

³ Véase en <https://www.icontainers.com/es/2019/08/06/la-historia-del-teu-twenty-foot-equivalent-unit/>. Consultado el 4 de abril de 2022.



Estudia tu

Licenciatura en Derecho

CUATRIMESTRAL | RVOE 20211348

SOLICITA INFORMACIÓN
555575 9840 - 555672 2020

ESTUDIA TU MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y FAMILIAR

CUATRIMESTRAL R V O E 2 0 1 8 1 2 2 6

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX



EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR EXHORTO. DE LA CDMX AL EDOMEX: UN ATENTADO CONTRA LA JUSTICIA

Dr. Raúl Miguel Arriaga Escobedo

Académico Universitario en el CUEJ. Abogado postulante.



Una persona demanda en la vía ordinaria civil el juicio de prescripción positiva, al considerar que cumple con los requisitos exigidos por la ley, teniendo obligación de solicitar que el llamamiento a juicio se haga por medio de exhorto, dirigido al juez competente en el municipio en Nezahualcóyotl que es la ciudad en donde radica el demandado.

El juzgado exhortado radica el exhorto y antes de diligenciarlo, señala que las copias de traslado “carecen de razón de cotejo del juzgado de origen”, por lo que previene al interesado para que en el plazo de tres días subsane esa omisión, apercibido que de no hacerlo devolverá el exhorto a su lugar de origen.

DEL EMPLAZAMIENTO Y EL EXHORTO

El emplazamiento es el acto procesal de comunicación por virtud del cual el juzgador da a conocer al demandado la admisión de una demanda enderezada en su contra, concediéndole un plazo para que pudiere liberarse de la carga de su contestación¹

Una de las acepciones de la palabra exhorto, considera que es “el despacho o comunicación que libra un juez a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento de lo que se pide”.²

En este contexto, dos cuestiones legales adquieren relevancia cuando se trata de emplazar a juicio vía

exhorto: el contenido de la petición del juez exhortante, que debe ser clara, categórica y precisa y la labor del juez exhortado, quien debe actuar en los términos que le solicitan, ya que su labor es, únicamente, coadyuvar con la petición de su homólogo, excepto que se faculte expresamente para que, por ejemplo, puede acordar en torno a alguna petición concreta autorizada en el propio pedimento, teniendo como elemento esencial, la realización del emplazamiento a juicio.

Esta situación genera varios cuestionamientos: ¿Qué sucede cuando el juez exhortado incumple con la petición del juez exhortante? ¿Qué ocurre cuando el juez exhortado, excediéndose en sus facultades establece comunicación directa con el interesado, alterando la relación comunicacional institucional entre pares? ¿Resulta válido el emplazamiento realizado al amparo de las dos legislaciones, o la legislación aplicable debe ser solamente una, esto es, la del juez exhortante o la del juez exhortado?

EL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LA ÓPTICA PROCESAL

La justicia puede verse desde distintas aristas, desde la concepción del derecho romano hasta las ideas contemporáneas, sin dejar de observar la clásica. Sin embargo, resulta de sumo interés, para los efectos que nos ocupan, la perspectiva que refiere Witker, al

¹ Derecho procesal, *Diccionarios jurídicos temáticos*, Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Facultad de Derecho-UNAM, Oxford University Press, México, 2001, p. 112.

² <https://www.google.com/search?q=exhorto+significado&oq=exhorto&aqs=chrome.2.69j57j0i512j0i131i433i512j0i512i7.5204j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

concebir la justicia como servicio público, pues partiendo que es uno de los valores del ordenamiento jurídico "...su realización es un objetivo fundamental de nuestro Estado democrático, que tiene a su cargo —como una de sus tareas fundamentales— dirimir controversias jurídicas, con la justicia como fin"³, entonces, el acceso a la justicia se concreta servicio público, en donde las personas tienen el derecho fundamental para acudir a los órganos cuya tarea es la impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses, a través de la sentencia o resolución definitiva correspondiente, misma que debe ser como lo indica el precepto constitucional: pronta, completa e imparcial.⁴

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL REFIERE QUE:

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

De la interpretación de este párrafo podemos hablar de las formas de acceso a la justicia, es decir, a través de la justicia tradicional y/o de los mecanismos alternos de solución de conflicto y de éstas, la que nos interesa es la primera, porque engloba al emplazamiento, por ser el conducto de comunicación para establecer el procedimiento contencioso, al amparo de los derechos que integran el debido proceso, con la importancia total del llamamiento a juicio, la posibilidad de ofertar pruebas y alegar en defensa de sus intereses.

LA IMPORTANCIA DEL EMPLAZAMIENTO

Quizá el acto procesal de mayor importancia en una contienda jurisdiccional sea, precisamente, el emplazamiento a juicio, pues es el momento en que las partes establecen el vínculo que dará inicio a la contienda, de modo que si no se cumple cabalmente

con los requisitos del llamamiento a juicio, posiblemente tendrá lugar la nulidad del mismo, y como consecuencia la nulidad de las siguientes actuaciones.

Hablar del emplazamiento implica referirse al cumplimiento del debido proceso, pues si consideramos los dos elementos básicos, es decir, defensa y alegatos, es imprescindible que ese derecho humano previsto en la Constitución sea respetado.

Desde la óptica doctrinal se considera al emplazamiento, no como un término "...en virtud de que este último [el emplazamiento] es el advenimiento de una fecha única en la que puede realizarse el proceder ordenado, y por ello el término es el fin del plazo".⁵

En estas condiciones, resulta pertinente considerar que el cumplimiento de los requisitos del emplazamiento, tanto para el actor como para el demandado significará, el principio del acceso a la justicia en condiciones de igualdad procesal, así como los de principios de certeza y seguridad jurídica, respetando y dando cumplimiento al principio del debido proceso.

LOS REQUISITOS DEL EMPLAZAMIENTO EN LA CDMX

Desde la jurisprudencia los requisitos que debe cubrir el emplazamiento, en términos materiales refieren, en lo que interesa:

DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO. EL COTEJO Y SELLADO DE LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS PARA CORRER TRASLADO AL DEMANDADO, LE CORRESPONDE AL SECRETARIO DE ACUERDOS Y NO AL ACTUARIO (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO).

"...que el Secretario de Acuerdos tiene diversas obligaciones, como..." "...d) Cuidar que las actuaciones (que corresponden a las promociones de las partes, los documentos y anexos que exhiban), oficios y demás documentos que lo requieran estén sellados y rubricados en el centro del escrito.

³ Witker, Jorge, *Competencias lectoras y narrativas para el derecho*, UNAM-IIJ, México, 2018, p. 197

⁴ Cfr. Ídem, p. 19

⁵ Flores García Fernando, *Voz: Medios de comunicación procesal*, Diccionario Jurídico Mexicano, IIJ-UNAM-PORRÚA, t. I-O, México, 2001, p. 2104,

En cambio, al secretario actuario le corresponde, entre otras cuestiones, “2. Hacer las notificaciones y practicar las diligencias decretadas bajo la responsabilidad de la fe pública que les corresponda...”

“De lo anterior se concluye que el cotejo y sellado de las copias de la demanda y sus anexos para correr traslado al demandado en la diligencia de emplazamiento, le corresponde al secretario de Acuerdos y no al actuario, pues su obligación es certificar o dar fe y asentar en la diligencia de emplazamiento que corrió traslado al demandado con las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y cotejadas (por el secretario respectivo)”.⁶

POSTURA DEL JUZGADOR DEL EDOMEX

El auxilio entre pares implica, en el caso a estudio, tres fases: razón, auto y razón de cotejo del juzgado, que consisten en:

1. Razón. En donde el Secretario de Acuerdos da cuenta al Juez de la petición del Órgano Jurisdiccional exhortante en términos del artículo 1.118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
2. Auto. Se Trata de la parte sustancial de la respuesta, integrada por: a) La orden para registrar el exhorto en el libro respectivo y con el número que corresponda; b) La aceptación para cumplir con lo solicitado por el Juez exhortante, al encontrarlo ajustado a derecho, cuestión que se sustenta legalmente en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; así como los numerales 1.141. y 1. 142 del Código Procesal Civil.
3. Razón de cotejo del juzgado de origen. En esta fase el juzgado exhortado consideró, textualmente lo siguiente:

“Toda vez que las copias de traslado que acompañan, carecen de razón de cotejo del Juzgado de origen, con apoyo en los cardinales 1.164 y 1.175 del

conjunto de normas invocado, se concede al interesado un plazo de tres 3 días contados a partir de la radicación del presente medio de comunicación para que las presente, en dicho lapso será devuelto a su lugar de origen, previas las anotaciones de estilo que se realicen, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Se dejan a su disposición las copias exhibidas para que recabe la razón citada, previa constancia que obre en autos”.

PARTICIPACIÓN DEL ACTOR

Tomando en cuenta que la persona que ejercita una acción ante el órgano jurisdiccional tiene el interés primordial del respeto a sus derechos, y que debe considerar la importancia del tiempo y el costo que genera comparecer a los tribunales, tiene las siguientes opciones:

- 1) Inconformarse con la actuación del juzgador exhortado, teniendo que determinar no el agravio sino ante qué juez lo debe impugnar;
- 2) Acatar la disposición de dicha autoridad, pidiendo al juez exhortante el asentamiento de la certificación requerida por el juzgador exhortado, sin dejar de considerar que esta gestión abarcará más de los tres días concedidos para subsanar la omisión o bien;
- 3) Promover un nuevo procedimiento con la mención expresa de la certificación aludida ante los Juzgados de la CDMX

CONCLUSIONES

Primera. La actuación del juez exhortado carece de sustento legal, pues sus determinaciones se encuentran indebidamente fundadas, careciendo también de la motivación necesaria para validar sus actos.

Segunda. El juzgado exhortado ordena, sin sustento

⁶ Tesis I.150.C.41 C (10a.), Décima Época, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, agosto de 2019, t. IV, p. 4533. Registro digital 2020368.

legal válido, la intervención del interesado para subsanar una falla del juez exhortante, lo que altera la relación entre pares, sobre todo porque al otorgar un término de tres días para subsanar la omisión de la certificación, resulta jurídica y materialmente imposible cumplir con dicha certificación, misma que debe realizarla el juzgado exhortante.

Tercera. La conculcación de los derechos procesales derivados del emplazamiento a juicio son cometidas por el juzgador exhortado, quien ni se ajusta a lo pedido ni a lo establecido en las normas secundarias de la norma vigente en la CDMX, entorpeciendo así el derecho de acceso a la justicia.

Cuarta. El juez exhortado debe ajustarse a lo pedido y llevar a cabo el llamamiento a juicio de acuerdo con las normas secundarias del juez exhortante para cumplir con el respeto a los derechos humanos de carácter procesal previstos en la norma constitucional, ya que al requerir “la certificación de razón de cotejo del juzgado de origen”, se excede en los requerimientos exigidos por la norma aplicable, provocando afectaciones graves a las partes, sea la nulidad en perjuicio de la parte actora o el emplazamiento defectuoso, en lo que hace al demandado, así como el desacato a lo pedido en el exhorto correspondiente, resultando un atentado contra la justicia.

NORMATIVA INVOCADA POR EL JUEZ EXHORTADO

■ Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México

Artículo 92.- Los ejecutores y notificadores tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones.

Los notificadores apoyarán como fedatarios públicos para el desahogo de videoconferencias en los órganos jurisdiccionales que no contemplen la figura del secretario de acuerdos.

Artículo 93.- Los ejecutores, notificadores y los demás servidores desempeñarán las labores que la ley o sus superiores les encomienden.

■ Código Procesal Civil del Estado de México

Artículo 1.141.- Las diligencias que deban practicarse fuera del territorio competencial de donde

se siga el juicio, se encomendarán por exhorto o despacho al Juez del lugar correspondiente.

Prácticas de diligencias por tribunal inferior.

Artículo 1.142.- Puede un Tribunal dentro de su jurisdicción, encomendar a un Juez inferior la realización de una diligencia

Plazo de tres días.

Artículo 1.164.

Cuando la ley no señale plazo para la práctica de algún acto procesal o para el ejercicio de una facultad, se tiene por señalado el de tres días.

Emplazamiento al demandado

Artículo 1.175.-

Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el Notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma, así como con transcripción del auto que ordene el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal donde se encuentra radicado. El Notificador levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos.



ecex
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

CDMX
VERACRUZ

Especialízate en

Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal

Av. Municipio Libre #103 Col. Portales,
Alc. Benito Juárez. C.P. 03300, México, CDMX
(55) 5998 8186 - 5575 9840 - 5672 2020 - 52430290

DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA
DR. CARLOS JAVIER VERDUZCO REINA



DERECHO PROCESAL FISCAL Y ADUANERO

RECURSO DE REVOCACIÓN Y JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL

Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com

LA INFLACIÓN COMO NUNCA EN 40 AÑOS



Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Doctor en Derecho. Profesor por oposición a la cátedra de Derecho fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Derecho fiscal en la Universidad Pontificia de México. Miembro del Claustro de Profesores del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Miembro del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Abogado postulante.

Si usted es ama de casa, acude regularmente al supermercado, o simplemente es consumidor de bienes recurrentes, habrá advertido seguramente un aumento generalizado de precios en los bienes que adquiere. Quizá habrá notado también que este fenómeno se ha acelerado a partir de la segunda mitad del año 2021 y especialmente en el inicio de este 2022. El tema no es menor y nos habla de la importancia de conocer la medición del porcentaje que mediante datos estadísticos representa el incremento en el costo de productos y servicios al consumidor final, es decir, el índice inflacionario¹. Y, sobre todo el por qué han subido tan repentinamente los precios.

En principio, el aumento en la inflación es una consecuencia lógica en una economía de mercado pues el incremento de valor en los bienes y el crecimiento del producto interno bruto nos hablan del crecimiento de la economía y que, la oferta y la demanda, son variables reales que juegan su papel en la integración de los propios mercados al presentar características particulares frente a cada grupo social. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares, como de las empresas y aun del mismo gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una

economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, aunque la deuda, en términos reales sigue siendo la misma, su valor real será menor que el que representaba antes de que se ajustaran a la alza los precios.² Sin embargo, la inflación también puede convertirse en un elemento de riesgo que frene la expansión económica pues representa la pérdida real del poder adquisitivo de los consumidores quienes con el mismo dinero adquieren cada vez menos productos o acceden a menores servicios. A este fenómeno se le conoce como la pérdida de poder adquisitivo y sucede cuando el aumento a los salarios no es por lo menos igual al incremento en los precios, lo que redundaría en el hecho de que el poder adquisitivo disminuye. Si nuestros sueldos aumentan en un 4 % en un año, pero la inflación ha sido del 7 %, en realidad podemos comprar un 3 % menos con ese mismo ingreso. Y cuando esto sucede estamos frente a uno de los problemas más complicados de resolver en una sociedad como la nuestra que debiendo procurar justicia social para los menos favorecidos, se torna selectiva al permitir que el acceso a bienes de consumo primario sea un lujo al que solamente acceden algunos miembros de la comunidad.

¹ "La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios promedio de los principales artículos de consumo. Para conocer qué productos deben incluirse en esta canasta representativa, se hace generalmente una encuesta a una muestra representativa de hogares. La composición de la canasta usada para el IPC varía entre países y refleja los diferentes patrones de consumo e ingreso de cada uno de ellos." Gutiérrez Andrade, Osvaldo; Zurita Moreno, Andrea, "Sobre La Inflación", Perspectivas, vol. 9, núm. 3, 2006, pp. 81-115.

² Cfr. <https://economipedia.com/definiciones/inflacion.htm>

Este fenómeno, el aumento en el índice inflacionario, es una preocupación constante y permanente de los gobiernos de todo el mundo pues una inflación descontrolada ha llevado en más de una ocasión a la pérdida de gobernabilidad generalizada. No hay duda de que el control de la economía es por definición el medio más eficaz para ejercer políticas de gobernanza.

El reciente fenómeno del crecimiento inflacionario que estamos observando, justo es reconocerlo, no es un tema exclusivo de nuestro país. De hecho, estamos frente a un escenario de aumento en la inflación prácticamente mundial en el que países con economías tan sólidas como Estados Unidos están enfrentando aumentos inusuales que no se habían observado en décadas. Como ejemplo, vemos que la tasa del mes de febrero de 2022 en nuestro vecino y principal socio comercial aumentó un 7.9 %, porcentaje totalmente extraordinario para una economía como la norteamericana. Ello sin considerar aún el impacto que tendrá la guerra en Ucrania lo que seguramente disparará aún más el índice inflacionario en los meses de mayo y junio. El efecto en economías menos sólidas como la mexicana se convierten en retos mucho más difíciles de enfrentar y desde luego de resolver en el corto plazo. Baste decir, que el índice inflacionario al que nos enfrentamos para este año 2022 no se había observado en el mundo hace por lo menos 40 años. Es decir, hay personas que pertenecen prácticamente a dos generaciones que por primera vez tienen frente a sí un crecimiento inusitado de precios y servicios. Pero, ¿por qué se ha incrementado la inflación? Sin que pueda proponerse una respuesta única, adecuada y completa existen varias posibilidades para explicarlo.

Tradicionalmente, la inflación es resultado del aumento a la demanda. La demanda generalizada sobre bienes y servicios puede disparar su costo ante la ausencia o insuficiencia de los productos demandados. Este fenómeno es usual y se replica año con año de forma estacional. Seguramente todos recordamos como anualmente aumenta el precio del limón, el jitomate, el huevo o el aguacate

por citar ejemplos muy sencillos en temporadas ya conocidas, pero que ilustran como la necesidad de algunos satisfactores tiende a incrementar su costo ante la imposibilidad de la oferta de satisfacer en su totalidad el volumen de la demanda. No obstante, este fenómeno generalmente se controla cíclicamente por la propia producción de manera que los precios suelen estabilizarse y los índices generales no resienten una modificación significativa al final del año.³

Sin embargo, el escenario económico mundial no parece responder hoy a esta constante. Es evidente que la pandemia derivada del Coronavirus SARS-CoV-2 provocó una contracción económica mundial que detuvo de un solo golpe y prácticamente de manera total la producción económica en el mundo. Este fenómeno inesperado e inusitado generó un exceso de inventarios de todo tipo de bienes y mercancías que fueron saliendo al mercado en tanto la economía pudo reactivarse, fenómeno que claramente se ha ido advirtiendo de manera gradual y regional. Curiosamente, China, país en el que inició el efecto recesivo de la pandemia, ha sido la primera economía en recuperar la producción y el crecimiento económico que tenía antes de 2020. Desafortunadamente, no todas las economías tienen la misma capacidad de recuperación. La nuestra, por ejemplo.

Probablemente usted recuerda que en la segunda mitad del año 2020 y al inicio del año 2021 se podían adquirir bienes a precios relativamente baratos, incluso más baratos que antes de la pandemia. Todo ello, si bien tenía el propósito de reactivar la economía generó una pérdida natural en las utilidades esperadas por sus fabricantes que no rescataron ni remotamente la esperada de la producción de los años 2020 y parte del 2021. Probablemente por aquí comencemos a encontrar las respuestas a un fenómeno que aún nadie logra explicar con precisión.

La segunda mitad del año 2021 comenzó a registrar un aumento generalizado en los costos de bienes y servicios, es decir, nos encontramos frente a un esce-

3 A partir de los años 1990 comenzó a analizarse dentro del estudio general del fenómeno inflacionario, un componente particular de ésta, conocida hoy como inflación subyacente. Esta consiste en analizar el incremento continuo de los precios de un subconjunto de bienes y servicios que conforman el índice de precios al consumidor (IPC). El subconjunto prescinde de aquellos cuyos precios son más volátiles que los que presentan precios al consumidor regulares. "Normalmente podemos ver que la inflación subyacente tiene un comportamiento más suave, con menos altibajos, que la inflación general. En ciertos períodos la inflación subyacente es más alta o más baja que la general. La inflación subyacente es una medida de mediano a largo plazo de la tendencia general de la inflación." Consultado en: SOBRE LA INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE, PERSPECTIVAS, núm. 20, julio-diciembre, 2007, pp. 159-167

nario en que los precios aumentan sin que la demanda de estos se haya incrementado significativamente. La inflación entonces está generada por un aumento a los costos, esto es, a partir de la intención de recuperar utilidades perdidas en el tiempo en que la pandemia obligó a la contracción económica mundial y desde luego como consecuencia del cierre de un gran número de empresas que, naturalmente, ha concentrado la producción en menos proveedores que antes de la pandemia. Sin embargo, el tema, aunque pudiera quedar cerrado ante esta causa inicial tiene efectos mucho más complicados de explicar en el futuro cercano. El primero de ellos es que la inflación desordenada tiene un efecto contrario en el crecimiento de la economía porque genera incertidumbre frente a la pérdida de poder adquisitivo, provoca dudas sobre el nivel de ingreso personal e impacta negativamente en el incremento a los salarios de quienes viven del producto de una relación laboral. Por otra parte, un escenario recesivo detiene la producción y entonces sí provoca una inflación condicionada a la demanda de bienes no satisfechos.

En México el fantasma de la inflación elevada es sumamente preocupante porque está rodeado de la incertidumbre que provoca y la historia que le precede, y sobre todo porque quienes cargan de manera más directa con su efecto inmediato, son los sectores más pobres de la población, tal como lo estamos observando hoy, pues es evidente que los precios que más han subido son los que corresponden a alimentos básicos. Entonces, si concedemos que la consecuencia inmediata del aumento de precios es que el sector que lo reciente con mayor fuerza, desafortunadamente, está conformado por las personas de menores ingresos, su dimensión social es sumamente relevante. Así, la inflación se convierte en un factor estratégico de decisiones políticas que los gobiernos tienen que enfrentar con urgencia pues al ser los sectores de población más pobres

los más vulnerables a estos vaivenes económicos, se convierten en presa fácil de ambiciones políticas pocas veces de genuino interés nacional.

Los índices publicados recientemente no dejan lugar a dudas que estamos ante un problema real. Mire usted. En el año 2018, último de la administración de Enrique Peña Nieto la inflación anual acumulada fue de 4.83 % ya asimilado el tema del gasolinazo de principios del año 2017 que fue consecuencia de implantar la reforma energética y que particularmente se reflejó de pronto en un aumento no previsto en su impacto en el precio de la gasolina tema que hoy es de convivencia usual por todos los mexicanos y que no representa un riesgo por sí mismo. De hecho, el año 2019 primero de la actual administración, se continuó con la tendencia a la baja y la inflación acumulada fue de 2.89 %; sin embargo, en el año 2020 comenzó el efecto alcista al registrarse una inflación del 3.15 %. A pesar del escenario recesivo de que comentamos líneas arriba, lo anterior seguramente no fue considerado en la estrategia económica del gobierno porque el año 2021 se registró una inflación sin precedentes de 7.36 %⁴. El problema es que la perspectiva para el año 2022 no es necesariamente alentadora ante un escenario mundial poco favorable a la estabilidad macroeconómica. Cifras del Banco de México publicadas al 1 de febrero de 2022⁵ estiman que la inflación acumulada para este año será de 4.42 %. Esta cifra de por sí, ya elevada, no refleja el efecto de los acontecimientos más recientes a nivel global, uno ya comentado, la inflación en los Estados Unidos y otro, las consecuencias que tendrá la reciente invasión rusa a Ucrania, tema del que nos ocuparemos en el futuro. En contraste, analistas privados estiman que el 4 % es muy conservador, pronosticando que la inflación este año puede rebasar niveles superiores al 7 %⁶. Sobra decir que enfrentamos un escenario inédito que requiere tomar decisiones acertadas y a largo plazo.

4 Los índices anteriores corresponden a las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y corresponden a la inflación reconocida y medida por el propio instituto. Claramente estos índices son indicativos de la canasta global de productos y servicios por lo que probablemente no reflejen un índice real que en el caso de algunos productos super claramente el 30 % en el mismo periodo reportado. Los índices pueden verse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/inpc_2q/inpc_2q2019_01.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/inpc_2q/inpc_2q2020_01.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inpc_2q2021_01.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_2q/inpc_2q2022_01.pdf

5 Las cifras pueden consultarse en: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BDAEF415B-4E6F-451B-2D1F-BD55E968C5A0%7D.pdf>

6 Pueden consultarse los informes de los analistas privados en el siguiente enlace: <https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/PerspectivaSemanal-No1015030322.pdf>

Habría que añadir que la inflación no es un tópico que deba analizarse aislado o exento de otras consideraciones económicas e incluso de la oportunidad de tomar buenas decisiones políticas. Desde luego el papel del Banco de México será relevante para su control y manejo y los criterios generales de política económica que establezca el gobierno para la formación del presupuesto para el año 2023, también, por citar sólo dos ejemplos de la urgencia que implica atender el efecto de la tendencia alcista que estamos observando y que parece no tener freno en el corto plazo.

Nuestro país, a la par del combate a la inflación, enfrenta un reto quizá más importante y cuyo efecto se hace patente de manera evidente año tras año: impulsar el crecimiento económico hoy prácticamente nulo. Si bien la caída en el crecimiento del PIB es mundial, este fenómeno que se ha incrementado dramáticamente en México a partir del año 2019. Lo anterior es desde luego relevante pues si la inflación tradicionalmente acarrea un bajo crecimiento económico, el escenario para México no podría ser más sombrío, pues los niveles más recientes que miden el índice de crecimiento económico no sólo han sido bajos sino claramente negativos. No obstante, la tendencia mundial a regionalizar inversiones puede ser un factor para aprovecharse y generar que la economía mexicana crezca y enfrente con mayor éxito un escenario mundial recesivo. Para ello será preciso que las decisiones políticas y legislativas que se tomen en el futuro inmediato propicien seguridad para la inversión, particularmente la inversión extranjera directa que es la que crea nuevos empleos y fomenta el desarrollo económico. Si la inflación es un fenómeno mundial cuyo efecto ha impactado a todas las economías, el tema que sí podemos enfrentar es fomentar el crecimiento económico promoviendo inversión, más que regulación.

El escenario está ya frente a nosotros. De las opciones que tomemos para resolverlo dependerá el destino inmediato de nuestro país



PLATAFORMAS DIGITALES ¿ES NECESARIA UNA REGULACIÓN LABORAL?

Mtro. Enrique Bautista Paz

Licenciado en Derecho, maestro en Derecho laboral, maestro en Derecho constitucional y doctorando en Derecho. Catedrático de licenciatura y maestría de las asignaturas de Derecho colectivo del trabajo, Derecho procesal del trabajo, seguridad social, Derecho constitucional, amparo en Derecho social y amparo en Derecho público en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ponente en diversos cursos sobre los derechos laborales de los trabajadores y de la nueva reforma laboral. Litigante especialista en materia laboral y seguridad social, socio del despacho BAPAROSA ABOGADOS.



En la actualidad el ser humano vive en una era digital, rodeado de grandes avances tecnológicos que simplifican nuestras vidas, pero ¿cómo influyen estos avances dentro del mundo jurídico?

Se dice que el Derecho es constante y cambiante, ya que depende de varios factores para que tome su forma. Esta idea no es nueva, desde que iniciamos la carrera de Derecho se nos implanta, para posteriormente entender que las normas que nos rigieron como sociedad hace 20 años, no son las mismas que hoy, ni las que nos regularán en algunos años; siempre habrá variantes que hagan que el Derecho evolucione.

Los avances tecnológicos con los que contamos hoy en día, que están ligados con la vida del hombre, adolecen de una regulación jurídica que comprendan todos sus alcances, al ser aspectos nuevos y que jamás habíamos visto, por lo que el Derecho no los puede regular de forma inmediata, sino como van apareciendo. A esto se le suma otro problema, y es dilucidar la delgada línea que puede comprender un aspecto jurídico perteneciente a una u otra rama del Derecho.

En este artículo hablaremos de las plataformas digitales, también conocidas como *Startup*; empresas de nueva creación que comercializan productos o servicios mediante el uso de las nuevas tecnologías que nos ofrecen un servicio de transporte o de entre-

ga de alimentos e insumos. Estas plataformas han estado en comentarios de todos sus usuarios, ya que en últimas fechas se ha vuelto complicado delimitar si la relación que une a sus asociados es de índole comercial o laboral. Esto viene a colación con la sentencia emitida el año pasado por la Corte de Casación de Francia¹, donde se reconoce a Uber como patrón y, en consecuencia, debe de cubrir con todas las prestaciones que deriven de una relación de trabajo, inclusive las que comprenden la seguridad social.

Esto establece un precedente a nivel mundial, sin embargo, limitaremos esta situación al territorio nacional, para poder entender si en nuestro país podemos considerar a todas estas plataformas digitales como patrones.

Las plataformas más conocidas en nuestro país son Uber (Uber east), Rappi, Didi, entre otras. La primera llegó a nuestro país en 2013, y fue la pionera en este campo. Casi 8 años después, Uber se ha convertido en una de las plataformas más famosas e importantes de México y del mundo. En entrevista para la revista Forbes, el vicepresidente de operaciones de América de Uber mencionó que Uber impactó a nuestro Estado con 8 millones de usuarios activos, 35,000 restaurantes de Uber Eats y una inversión de más 1,500 millones de dólares.²

¹ <https://www.france24.com/es/20200305-economia-uber-francia-empleado-justicia>

² <https://www.forbes.com.mx/entrevista-8-anos-y-1500-mdd-despues-uber-quiere-mas-ciudades-y-usuarios-en-mexico/>

Por su parte, Rappi llegó al mercado mexicano en 2016, logrando para el año 2018 un crecimiento del 20 % en sus activos, siendo la segunda plataforma digital más famosa en nuestro país.

Desde una óptica económica resulta benéfico que estas plataformas se establecieran en nuestro territorio, pero en últimas fechas podría caer en una simulación jurídica con la única finalidad de evadir ciertas responsabilidades.

Estas son algunas de las plataformas que existen en México, la mayoría establecen requisitos similares para poder ser considerados como **SOCIOS CONDUCTORES "DRIVER"**, dentro de los cuales se encuentran: vehículos con un modelo en específico y ciertas características, ya sean automóviles o motocicletas; licencia de conducir; teléfonos inteligentes "Smartphone" e; internet móvil, con la finalidad de poder conectarse mediante una aplicación y poder recibir las indicaciones para brindar su servicio de recolección y entrega o transportación de usuarios.

Cuando estas plataformas llegaron a nuestro país, era más que suficiente cumplir con los requisitos mencionados, aceptar los términos y condiciones que se especifican en la página web oficial de la plataforma en referencia, descargar la aplicación y comenzar a repartir. No existían limitaciones o restricciones respecto del tiempo en que el socio conductor debía de conectarse, o el tiempo que permanecía desconectado de la aplicación, con esto, su lema fue "GENERA GANANCIAS EN TU PROPIO HORARIO".³

En los últimos años y ante las nuevas reglas para pertenecer como socio conductor en estas plataformas, miles de "DRIVERS" han iniciado una lucha para que sean considerados como trabajadores.

Con la finalidad de comprender mejor la situación dividiremos la problemática en dos etapas. La

primera, cuando la mayoría de las plataformas se instalaron en el país, y que se distingue por no requerir un mínimo o máximo de tiempo en que los socios conductores debían de permanecer conectados a través de la aplicación, por lo que se inclinaba a un aspecto más comercial, debido a que los conductores decidían de forma libre cuándo conectarse. La segunda, cuando la demanda creció, tanto la afiliación de nuevos conductores y los usuarios en este servicio delimitando el tiempo a tres años en esta etapa se vuelve un poco complicado establecer a qué situación jurídica pertenece, si es de índole mercantil o laboral.

Para comenzar a dilucidar el panorama, es importante resaltar las condiciones en que actualmente se desempeña la actividad consistente en los viajes, que se reflejó en el endurecimiento de las condiciones. Estas limitan y de cierta forma sancionan el tiempo en que el driver se conecta; la prueba reside en que se les solicita a los conductores informen cuántas horas van a conectarse a la aplicación para que un algoritmo envíe los viajes dentro de dicho horario y, de cierta forma, se les obliga a que se decidan conectarse en horarios que les convienen a las plataformas. El problema aparece cuando por razones ajenas, no pueden conectarse en el horario que fue solicitado, situación que el algoritmo de la aplicación toma en cuenta y, cuando se vuelve a conectar, de cierta forma le sanciona. De igual forma se tomaron medidas más rígidas respecto de la calificación que hacen los usuarios, o que los conductores rechacen tres viajes consecutivos en un período determinado, todas estas conductas son sancionadas con un tiempo de espera mayor para que puedan asignarle viajes y entregas. Es decir, no le envían viajes de forma inmediata, como sí lo harían si cumple con el horario que reservó, tiene buena calificación o no rechaza ningún viaje. Lo que de forma directa impacta a todos los conductores afiliados en la asignación de viajes que implica un mayor ingreso.

³ <https://www.uber.com/mx/es/s/e/join/>

La legislación laboral contempla que no es necesario un contrato por escrito para la existencia de la relación de trabajo, sólo basta la voluntad de los implicados, así como pactar la forma en que se realizará el trabajo. El vínculo laboral se integra por varios elementos; dos elementos personales, a los que se les puede denominar patrón y trabajador, y tres elementos materiales: la actividad a desempeñar, es decir el trabajo; el salario, y por último la subordinación. Los primeros cuatro elementos, pueden aparecer con otras denominaciones con la finalidad de simular una relación jurídica de otra índole, sin embargo, la subordinación siempre debe de estar presente cuando se habla de una relación laboral, ya que consiste en un deber de obediencia o, en otras palabras, cómo, cuándo y dónde realizar la actividad encomendada. En esta tesitura, las nuevas condiciones de las plataformas obligan a los conductores a conectarse en los horarios en los que les convienen a las aplicaciones para obtener un mayor beneficio económico, lo que acaba con la libertad de los conductores para poder decidir de forma libre cuándo y cómo se conectan, aunado a que los **"DRIVER'S"** no pueden decidir las tarifas que aplican (control total de **"Startups"**), ni elegir a sus propios clientes o proveedores (prohibición de realizar un viaje con clientes ajenos a estas plataformas).

En resumen, los nuevos términos y condiciones apuntan a la existencia de una relación jurídica de tintes sociales, lo que inevitablemente traerá consigo responsabilidades, no sólo el pago de prestaciones, sino la inclusión de la seguridad social, delimitando de esta forma la naturaleza de la relación contractual. Todavía falta un largo trayecto para regular esta nueva actividad, pero ya se gestan diversos movimientos sociales que buscan la declaración por parte de la autoridad competente de que nos encontramos ante una relación de trabajo, entre las plataformas digitales **"Startup"** y los **SOCIOS CONDUCTORES"DRIVER"**.





YA SE VIVE LA CIENCIA FICCIÓN EN LA REALIDAD Y EL DERECHO, MIENTRAS TANTO, ANQUILOSADO

Dr. Víctor Amaury Simental Franco

Licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Maestro y doctor en medio ambiente y desarrollo por el IPN. Correo electrónico: simental_franco@yahoo.com.mx

Clonación, organismos genéticamente modificados, siembra de nubes y cosecha de lluvia, internet, impresoras en tercera dimensión, estaciones espaciales permanentes, colonización de Marte, teléfonos celulares inteligentes, robots, procesadores cuánticos, la lista de tantos y descubrimientos científicos, de tecnologías que superan ampliamente la imaginación de los literatos del siglo XIX y primera mitad del XX es abrumadora.

Los efectos del avance científico y tecnológico se dejan sentir en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tanto las sociedades avanzadas de los países desarrollados, como las comunidades indígenas que han permanecido aisladas durante miles de años, evidencian impactos notables en la vida ordinaria.

Cambios vertiginosos ante los cuales los individuos y las sociedades solamente intentan adaptarse, en la que siempre hay muchos rezagados o nostálgicos por los tiempos pasados de unas pocas décadas atrás, incapaces de entender la permanente (re)evolución.

Sin embargo, así como algunos individuos y algunas comunidades son menos resilientes, lo mismo pasa para ciertos ámbitos del conocimiento, que por sus propias características tienden al conservadurismo, uno de estos lo es el derecho.

Es cierto y es bienvenido que el derecho tienda a la estabilidad (conservadurismo) pues (se supone) esto da estabilidad (al menos en lo normativo) a la población.

Sin embargo, ante un mundo en que la única constante es el cambio acelerado y que los cambios y la velocidad en que se dan, son cada vez más y más rápidos, ¿cómo puede permanecer impasible el derecho?

Ya no es racional aplicar las tesis expuestas por Novoa, en su ya clásico *El derecho como obstáculo al cambio social*, pues este (de por sí) se va a dar con el derecho o pesar del derecho.

No puede negarse que se realizan múltiples acciones que podrían indicar que contrario a lo antes expuesto (la estática jurídica, ante la dinámica social), entre otras (para el caso mexicano, pero que seguramente, también pueden trasladarse a otras latitudes con relativa facilidad): los códigos y las leyes continuamente se están reformando, se incluyen tipos, reglas y definiciones que contemplan nuevos fenómenos sociales (su vez derivados, muchos de estos, por los descubrimientos científicos y tecnológicos), es más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitución formalmente rígida, ha sido materia de innumerables reformas y contrarreformas en los tiempos recientes; el trabajo legislativo y reglamentario muestra una labor incansable, y lo mismo acontece tanto a nivel federal como local.

No obstante lo indicado en el último párrafo, el que haya abundancia de trabajo legislativo (al menos en cuanto a la cantidad de iniciativas de ley y o de reformas tanto a la Constitución, como a la legislación secundaria) y lo mismo a la adecuación al ámbito administrativo de la legislación (facultad reglamentaria), consideramos que este maremágnum normativo está muy lejos de poner al día al derecho versus la dinámica social derivada, a su vez, de la llegada de la “ciencia ficción a la vida real”.

VEAMOS ALGUNOS SUPUESTOS:

- Las nuevas estructuras jurídico-familiares, si bien, en la Ciudad de México se ha dado apertura a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y además se normó el divorcio incausado, en general siguen ausentes las normas que tutelen a la familia como la célula social, el derecho no sólo debe ser reactivo, sino debe servir como guía conductual hacia un destino de nación, está muy ausente del cumplimiento por la norma secundaria de los principios constitucionales que rigen al respecto, como por decir un supuesto esencial: la tutela del interés superior de los menores.
- La conciliación entre las expectativas individuales, las colectivas, los derechos humanos y las nuevas dinámicas sociales, verbi gratia, el aborto; nuevamente la única entidad que lo tiene regulado, permitiendo a la mujer decidir libremente sobre su cuerpo (y su vida) es la Ciudad de México, pero mientras en el resto de las entidades persisten diversas causales que penalizan esta situación. En tiempos en que la ciencia cada vez está más cerca de entender los misterios de la vida y de la muerte, aún persiste legislación que criminaliza la libertad de las mujeres para decidir cuestiones que son de su más entera intimidad.
- La clonación y la reproducción humana asistida, el cerrar los ojos ante una realidad, no conlleva que estos dejen de existir, respecto a la clonación se tiene una anomia prácticamente absoluta. Se está ante un vacío normativo que puede generar consecuencias muy dañinas para el seno social. Por cuanto hace a la reproducción humana asistida, hay una variabilidad enorme entre unas entida-

des y otras, mientras que unas lo permiten, el grado de reconocer la validez de los contratos de maternidad subrogada, en tanto que otros Estados lo prohíben expresamente, así como todos los matices normativos que se puedan encontrar al respecto, no sólo no hay uniformidad, sino hay tal diversidad, que se genera un enorme caos normativo, que en cualquier momento puede derivar en casos imposibles de resolver.

- Los hechos jurídicos cibernéticos, aun cuando se han venido regulando tanto a nivel civil, como en el ámbito penal, la realidad es que falta mucho al respecto, tanto en cuantitativamente, como cualitativamente, veamos: los contratos son materia de regulación de la competencia local, así que los contratos que se realizan vía internet o tecnologías similares, deberían ser regulados por los códigos civiles estatales, situación que no acontece; mientras que los delitos que se realizan por medios electrónicos también carecen de la mejor sistematización posible por la normativa aplicable, lo cual deriva en que muchos ilícitos terminen sin generar sanción para los delincuentes.

Por supuesto que el listado anterior, tiene sólo fines descriptivos, en lo más mínimo es exhaustivo, algunos otros temas, lo serían, el cambio climático (con una ley especial que ha sido letra muerta, tanto por una deficiente técnica legislativa en su elaboración, como por falta de voluntad de las autoridades competentes); impacto en las especies vegetales y animales nativas por la impronta de organismos genéticamente modificados; la inteligencia artificial, con todas las implicaciones que puede traer para conceptos jurídicos tal como el de personalidad.

Es tiempo para que el Estado mexicano destine recursos específicos para poner al día al caótico entramado jurídico, tanto para resolver las antinomias existentes, subsanar las anomias, pero sobre todo para que el derecho cumpla uno de sus fines esenciales: servir como eje conductual para iluminar el sendero por el cual debe transitar la sociedad.



CENTRO UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS JURÍDICOS

ESTUDIA TU LICENCIATURA EN DERECHO

CUATRIMESTRAL RVOE 20211348

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX



RÉGIMEN LABORAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN



Mtro. Magdaleno Villanueva Flores

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, de donde egresó con la especialidad de Derecho del trabajo. Maestro en Derecho fiscal y administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, doctor honoris causa y doctorando por la misma institución. Docente en la UNAM-SUA, Instituto Patria Bosques, Instituto Universitario de las Naciones Hispánicas y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Abogado postulante en materia de laboral, civil y familiar desde 1992 a la fecha. Apoderado legal de INFONAVIT de 2005 a 2014 y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C.V., de 2008 a 2014. Director de procesos contenciosos penales y laborales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2015 a 2020. Actualmente es socio director del despacho jurídico Villanueva y Asociados.

Según el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal. A su vez, al establecer las bases para su organización, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en su artículo 1º, señala que la administración pública centralizada se conforma por la Oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados. Mientras que la administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.

Por mandato constitucional, la LOAPF realiza la distribución de los negocios del orden administrativo que están a cargo de cada una de las secretarías de Estado y define las bases generales para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Además, en su artículo 3º, esta ley señala que los integrantes de la administración pública paraestatal sólo son auxiliares del Poder Ejecutivo de la Unión.

Posteriormente, en su artículo 45, la LOAPF establece que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Por tanto, los organismos descentralizados pueden ser creados por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, es decir, pueden tener un origen legislativo o un origen administrativo, y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, el órgano de creación tiene libertad para configurar la estructura legal que deberán de adoptar estos.

Con base en lo anterior, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal han creado diversos organismos descentralizados. Asimismo, en los decretos de creación se ha establecido la estructura legal que estos deben de adoptar y, también, se ha establecido el régimen laboral que les será aplicable en las relaciones con sus trabajadores. Por ello, algunos siguen el régimen laboral establecido en el apartado A, del artículo 123 Constitucional; mientras que la mayoría han sido asignados al régimen laboral establecido en el apartado B de dicho dispositivo constitucional.

A su vez, al emitir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, y determinar su ámbito personal de validez, el Congreso de la Unión estableció, según el artículo 1º, que dicha ley era de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y diversas Instituciones, a saber: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores, que tengan a su cargo función de servicios públicos.

Con base en lo anterior, durante muchos años se consideró que el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados de carácter federal era el establecido

por el apartado B del artículo 123 Constitucional y, por tanto, sus relaciones laborales se encontraban reguladas por la LFTSE.

Como consecuencia de diversos casos que fueron del conocimiento de los tribunales jurisdiccionales federales laborales, entre los años de 1993 y 1995, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al conocer de diversos juicios de amparo en revisión, por unanimidad de votos adoptó la Jurisprudencia P./J.1/96, aprobada el 15 de enero de 1996, en cuyo rubro se determinó que el artículo 1º de la LFTSE era inconstitucional.

Para mejor comprensión del tema, veamos lo qué dice la Jurisprudencia P./J.1/96:¹

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1º. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTAD-

DO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, **otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1º. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático** no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a **los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.**²

En resumen, en la jurisprudencia P./J.1/96 se determinó que, no obstante que los organismos descentralizados integran la administración pública paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo federal. Por tal motivo, al expedir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, que el Congreso de la Unión los haya incluido en el artículo 1º de esta y, por tanto, los haya sujetado a dicho régimen laboral fue un acto inconstitucional. En consecuencia, se determinó que el régimen laboral aplicable a los organis-

1 Tesis P./J. 1/96, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. III, febrero de 1996, p. 52. Registro digital: 200199.

2 Nota: Lo subrayado es nuestro.

mos descentralizados de carácter federal era el establecido en el apartado A del artículo 123 constitucional y, debido a ello, se debía de aplicar la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria de este apartado.

Durante veinticinco años, desde 1996 hasta 2021, la aplicación práctica de la jurisprudencia P./J.1/96 generó interpretaciones diversas por parte de los tribunales colegiados de circuito, al resolver diversos casos concretos, y esto trajo consigo inseguridad jurídica para los justiciables, pues incluso generó diferencias en las condiciones de trabajo entre trabajadores de un mismo organismo descentralizado, no obstante tener la misma categoría y realizar el mismo trabajo. Por tal motivo, la Segunda Sala de la SCJN propuso al Pleno de esta la sustitución de la jurisprudencia antes citada.

Mediante el expediente 2/2020, el Pleno de la SCJN le dio trámite a dicha propuesta, siendo resuelta en la sesión pública celebrada el 11 de octubre del 2021, donde se aprobó la sustitución de la jurisprudencia P./J.1/96 por mayoría de ocho votos y tres en contra. Sin embargo, se acordó que la redacción final del texto se revisaría y se aprobaría en sesión privada, la cual se verificó el 22 de noviembre del mismo año.

Como consecuencia de lo anterior, en sesión del 22 de noviembre del 2021, el Pleno de la SCJN aprobó, con el número 10/2021 (11a.), la tesis jurisprudencial que contiene el texto siguiente:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

Hechos: Derivado de la aplicación de casos concretos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de la

tesis jurisprudencial P./J. 1/96 mediante la cual, el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos.

Criterio jurídico: El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino sólo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley, o en los decretos de creación respectivos, el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados.

Justificación: No es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General considerando un criterio funcional, pues sólo en el caso de las universidades e instituciones de educación superior, así como tratándose de la banca de desarrollo, se adopta un régimen laboral específico en forma expresa; de este modo, debe atenderse a la libertad de configuración tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, porque la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión de política pública, en donde el órgano creador del organismo descentralizado federal decide su régimen laboral, a fin de lograr de una mejor manera la finalidad para la que fue creado.³

3 Tesis P./J. 10/2021 (11a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, t. I, enero de 2022, p. 5. Registro digital: 2024102.

Esta tesis sustituye a la jurisprudencia P./J.1/96 y fue publicada el viernes 28 de enero de 2022 en el Seminario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de enero del mismo año.

Del contenido de dicha Jurisprudencia concluimos que, a partir de su entrada en vigor, las relaciones laborales de los organismos descentralizados de la administración pública federal y sus trabajadores se regirán por el apartado que se haya señalado de manera expresa en la ley o decreto de su creación, por lo que muchos juicios laborales volverán a tramitarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Que, por consecuencia, a dichas relaciones laborales les será aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, sólo de manera supletoria, la Ley Federal del Trabajo.

Además, los organismos descentralizados de carácter federal que se creen a partir de su entrada en vigor regirán sus relaciones laborales por el apartado que expresamente se designe en su ley o decreto de

creación, atendiendo a la libertad configurativa de que gozan los órganos de creación, ya sea al Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal. Incluso, dicha libertad configurativa podrá ser invocada por los órganos de las entidades federativas al constituir sus correspondientes organismos descentralizados, según el artículo 116, fracción VI, constitucional.

Sin embargo, deberán de respetarse los derechos adquiridos por los trabajadores, ya sea por contratación colectiva o individual, o por resoluciones judiciales, generadas por efectos de aplicación de la jurisprudencia P./J.1/96; pues considerar lo contrario implicaría la aplicación retroactiva de jurisprudencia sustituta, lo cual está prohibido por el artículo 127 de la Ley de Amparo.

De igual manera, los procesos laborales que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva jurisprudencia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o ante los Tribunales Laborales Federales, en las entidades donde ya esté operando el nuevo sistema de justicia laboral, deberán de tramitarse ante dichas instancias, pues al momento de su inicio eran legalmente competentes y, por tanto, deberán de continuar conociendo de dichas controversias hasta su resolución final.

Por último, diremos que dicha jurisprudencia no será aplicable a las universidades e instituciones de educación superior a las que el artículo 3, fracción VII, Constitucional les reconoce autonomía, por lo que estas seguirán rigiendo sus relaciones laborales por el apartado A del artículo 123 constitucional.



BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SENTENCIA FIRME COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Mtra. Thelma Elizabeth Merino González

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulada con mención honorífica. Maestra en Derecho Fiscal y Administrativo en el CUEJ y doctoranda en Derecho en el mismo Centro de estudios. Trabajó en un Juzgado Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; actualmente labora en el Servicio de Administración Tributaria en el área de recaudación y es funcionario fiscal de carrera. Ha impartido clases en instituciones privadas de las materias administración pública, Derecho administrativo, Derecho procesal fiscal, práctica forense de derecho civil y apología del derecho procesal.



El pasado 22 de junio de 2020, en sesión remota del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutió el proyecto de resolución propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo al amparo directo en revisión 3584/2017¹, cuyos razonamientos y conclusiones son relevantes para nuestro sistema jurídico, ya que se reconoció la posibilidad de que, eventualmente, proceda la indemnización por error judicial prevista en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos², terminando así con los criterios que por mucho tiempo sostuvo la propia Corte, en el sentido de que sólo podía exigirse indemnización por la actividad administrativa irregular del Estado, es decir, por los errores de las dependencias del Poder Ejecutivo.

EL EMBLEMÁTICO AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3584/2017

El 22 de septiembre de 2010, una persona fue condenada a una pena de cincuenta años de prisión por la

comisión del delito de homicidio; dicha sentencia fue confirmada por una sala penal, sin embargo, después de dos juicios de amparo, un tribunal colegiado que suplió la deficiencia de la queja, determinó que se había realizado una incorrecta valoración probatoria y concedió el amparo para el efecto de que la Sala dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara otra en la que lo absolviera, esto, después de que la persona permaneció poco más de cuatro años de prisión.

Con esa base, esta persona demandó en la vía ordinaria civil del Gobierno del Distrito Federal, la reparación del daño moral, con fundamento en los artículos 1916 del Código Civil³ y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero después de un recurso de apelación y dos juicios de amparo que no cumplieron sus pretensiones, la autoridad judicial concluyó que el último párrafo del artículo 109 constitucional⁴, sólo preveía la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular, pero no jurisdiccional, lo que constituía una restricción expresa a indemnizar por error judicial.

1 Véase <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2021-10-13/22%20de%20junio%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf> Consultado en fecha 23 de enero de 2022.

2 Artículo 10. Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

3 Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás...

4 Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: ... La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Por lo anterior, el asunto llegó en revisión a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, planteó su conocimiento al Tribunal Pleno, por considerar la existencia de un tema de naturaleza constitucional, y sus conclusiones relevantes fueron que, derivado de la inclusión en nuestro sistema jurídico del reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, a partir de la reforma al artículo 1º constitucional de 10 de junio de 2011, el derecho humano a ser indemnizado por error judicial, previsto en el artículo 10 de la Convención formaba parte de nuestro parámetro constitucional y era dable exigirla, independientemente de lo previsto en el artículo 109 constitucional, por no contener una restricción expresa para ello.⁵

Como señalamos al inicio del presente, el pronunciamiento del Pleno fue importante, sin embargo, el impedimento que encontraron para analizar profundamente los elementos constitutivos del citado derecho humano, fue la ausencia de una sentencia firme a la que se atribuyera el error judicial, considerando que la resolución condenatoria en el proceso penal fue revocada y se absolvió a la persona.

Sin duda, cada uno de los requisitos para la efectividad de este derecho humano de talla internacional son complejos, no obstante, proporcionaremos unas breves notas al respecto.

REQUISITOS DE LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL

Del contenido del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se pueden identificar los tres requisitos que integran el Derecho Humano a ser indemnizado, a saber: 1) que una sentencia contenga un error judicial, 2) que la misma esté firme, 3) que se encuentre regulada la manera de indemnizar.

Con respecto al error judicial, comencemos por señalar que las sentencias son un producto humano, por lo tanto, reconocemos que pueden tener errores, algunos formales que no afectan su sentido, como puede ser algunas faltas ortográficas, cambio en el

puntos resolutivos, entre otros; sin embargo, puede haber errores que sí trasciendan al sentido de la resolución y afecten a las partes en litigio, y que igualmente pudieron haberse emitido por autoridades jurisdiccionales o por autoridades administrativas, a través de los procedimientos contenciosos administrativos. Al respecto, Jaime Marroquín expuso: “Sabemos que al margen de cualquier disquisición, el error judicial es una realidad; sabemos que éste puede ser causa de que el justiciable pierda injustamente su libertad, su patrimonio, su honra; puede destruir a su familia o destruirlo a él. Asimismo, un error judicial puede producir la impunidad del autor de un hecho ilícito, y provocar que el juzgador descuidado o inepto, sin desearlo, otorgue en una resolución al autor de aquél, algo que no le corresponda.”⁶

Por su parte, Natalia Mendoza realizó un interesante trabajo de compilación de algunas definiciones dadas por diversos autores sobre el error judicial, y por su parte, ella propuso la siguiente: “Es aquella conducta antijurídica, que vulnera la propia naturaleza de la función judicial, contenida en la emisión de sentencia firme en un caso concreto, que cause un daño efectivo del cual no se tuviera la obligación jurídica de soportar”⁷.

En la resolución del 22 de junio de 2020 que comentamos, algunos ministros externaron su interés por definir al error judicial, incluso la vía para reclamarla, desafortunadamente, la tarea se desechó por considerarla una cuestión de legalidad, ajena a la materia de la revisión, que se acotaba exclusivamente a la interpretación del artículo 109 constitucional.

Con relación a la sentencia firme, José Ovalle explica que es aquella que ya no puede ser impugnada, sea porque las partes no lo hicieron en tiempo, o porque lo hicieron y agotaron todos los medios ordinarios de defensa; la sentencia firme posee autoridad de cosa juzgada. También aclara, que la sentencia firme no debe confundirse con la sentencia definitiva, ya que esta es la que resuelve el conflicto sometido a proceso, pero que puede ser impugnada a través de algún recurso o proceso, el cual, puede concluir con la confirmación, modificación, revocación o anulación de dicha sentencia.⁸

5 Véase <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6150> Consultado en fecha 23 de enero de 2022.

6 Marroquín Zuleta, Jaime Manuel, “El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa”, Ensayos jurídicos en memoria de José María Cajica Camacho, México, Cajica, 2002, vol. II, p. 557.

7 Mendoza Zamudio, Natalia, “Regulación de la responsabilidad patrimonial por error judicial en México”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, México, núm. 34, julio-diciembre de 2019, p. 40.

8 Cfr. Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, 10a ed., México, 2016, pp. 215-223.

No obstante, es importante precisar que la cosa juzgada tiene una razón más práctica que la de establecer la verdad legal, porque su declaratoria nos anuncia la posibilidad de ejecutar las sentencias, y es inexacto que no admita revocación, pues desde el derecho romano se admitieron supuestos excepcionales en los que se podía demandar su nulidad, lo cual, a la fecha se admite en nuestro sistema jurídico.⁹ Sobre este punto, la Corte precisó que una sentencia es firme sólo cuando concluyó el amparo.

En lo tocante a la regulación de la forma de indemnizar, nuestro sistema jurídico cuenta con dos procedimientos instrumentados para que el Estado indemnice a las personas: el primero para las víctimas del delito y violaciones a Derechos Humanos en la Ley General de Víctimas, el segundo, resarce por su actividad administrativa irregular, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El primer ordenamiento se encuentra estructurado conforme al control de convencionalidad, pero su enfoque es la materia penal y exige una resolución que declare el error judicial; por cuanto a la segunda ley, no usa la expresión error judicial, sólo habla de la actividad administrativa irregular y también requiere de una resolución que la declare, a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la autoridad presuntamente responsable, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, acreditando el nexo causal y la lesión producida, así como la valoración del daño o perjuicio.

Al respecto, consideramos que la ejecución de la indemnización por error judicial debe llevarse a cabo con base en esta segunda ley, partiendo de la afirmación que todos los empleados que desempeñan actividades formal y materialmente jurisdiccionales son servidores públicos, y actúan en representación del Estado dictando el Derecho.

LA PARADOJA DE LA SENTENCIA FIRME

El razonamiento para afirmar este punto es el siguiente: para poder exigir del Estado la indemnización por error judicial, se requiere que la sentencia que lo

contenga sea firme, lo cual, únicamente mediante su revisión por la segunda instancia o el juzgador de amparo se puede detectar, y cuando esto ocurre, el efecto que se ordena para reestablecer el derecho o garantía fracturados, es revocar, modificar o nulificar la sentencia defectuosa, y entonces deja de surtir efectos para convertirse en un documento histórico dentro del expediente respectivo. No es firme porque fue impugnada y otra resolución la nulifica, es como si no hubiera existido. Sin duda esto es paradójal.

Ahora vislumbremos el caso contrario: si una resolución se emite con base en un error judicial, pero no es controvertida y causa firmeza, nunca se encontrará el error. Aunque su existencia ofenda al Derecho, sobre todo si comprendemos a este como una integridad, a partir de su estrecha conexión con la moral y la coherencia de los principios como lo planteó Ronald Dworkin¹⁰, la resolución surtirá sus efectos dañinos a las partes.

CAMBIAR EL PARADIGMA

Las citadas contradicciones parecen insuperables, sin embargo, pensamos que la clave para eliminar el primer obstáculo consiste en redefinir el paradigma que tenemos sobre la sentencia firme base de la acción indemnizatoria, pues si observamos con la renovada luz de las teorías jurídicas postpositivistas, que han dejado de aseverar al Derecho como un mero sistema de reglas, neutral o funcional, y que ha evolucionado hacia una concepción de principios reconocidos en el orden constitucional a partir de la exaltación de la dignidad humana, a los cuales reconoce como mínimos, que no se agotan por su carácter progresivo, y que nuestro país admitió al constitucionalizar el derecho internacional a partir del año 2011, entonces podemos afirmar que los Poderes de la federación no tienen por qué limitarse a la literalidad de las disposiciones convencionales, sino tomarlas como puntos de partida que amplíen la protección general de las personas.

Sobre el particular, Fabiola Martínez señala: “La discusión del recurso judicial efectivo asociado al juicio de amparo representa una tarea pendiente por vincularse

⁹ Cfr. Ovalle Favela, José, “Derecho procesal...”, cit., pp. 223-224.

¹⁰ Cfr. Flores Mendoza, Imer Benjamín, “Ronald Dworkin (1931-2013) Vida y obra”, en Documentos de trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2016, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, pp. 1-2.

con una garantía de acceso a la justicia y, por lo tanto, un derecho fundamental, cuyo objetivo principal es la eficacia y realización material de los derechos en un Estado democrático y constitucional.”¹¹

Desde nuestro punto de vista, el precepto convencional integra una restricción del derecho a la indemnización que es conveniente, porque a partir de una declaratoria emitida por autoridad competente del error detectado, que trascienda al sentido de la sentencia, es que se puede activar el mecanismo indemnizatorio; no obstante, la restricción se está usando para mantener lesionado el derecho. Para abundar, Daniel Vázquez señala: “es un error no considerar las restricciones materiales propias del contexto que limitan el ejercicio de derechos, pero sería un error usar esas restricciones como argumento para violentar el ejercicio de derechos. Por eso, igual que en el contenido esencial, en la aplicación del principio de progresividad es relevante recuperar dichas restricciones propias del contexto, pero usarlas para pensar a partir de qué medidas podemos regresar a la senda del avance en el goce de los mismos.”¹²

Entonces concluimos que, para lograr la efectividad del derecho humano a ser indemnizado por error judicial en sentencia firme, esta debe ser aquella emitida por la superioridad o juzgador de amparo que, una vez que causa firmeza y adquiere la calidad de cosa juzgada, ordena revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada, a partir del análisis y señalamiento de que el juzgador de menor grado o distinta instancia, incurrió en error judicial. Esa es la sentencia firme base de la acción indemnizatoria.

Si bien este cambio eliminaría la paradoja, reconocemos que no solucionaría la situación, pero daría pauta para continuar con el siguiente

aspecto: definir qué se debe entender por error judicial, y dicha tarea no es fácil cuando sabemos que la administración e impartición de justicia de nuestro país está invadida por el nepotismo, la corrupción, la deficiente argumentación de los operadores jurídicos, cargas excesivas de trabajo, emisión mecanizada de resoluciones, tiempos políticos adversos, entre otros vicios, inclusive, pensamos que sería viable promover un litigio estratégico que obligue a la autoridad jurisdiccional al análisis integral del tema y la ponderación de derechos, con herramientas como los test de contenido esencial de derechos, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles; por supuesto, para ello se necesitan argumentos jurídicos nutridos, sólidos, suficientes, pues como refiere Víctor Simental: “El operador jurídico a efecto de argumentar válidamente deberá realizar un razonamiento jurídico (y la expresión de éste) que incluya y manifiesta valores y principios, por encima de la estipulación normativa.”¹³



11 Martínez Ramírez, Fabiola, “El juicio de amparo mexicano como recurso judicial efectivo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Herrera García, Alfonso (coords.), *El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, t. II, p. 111.

12 Vázquez, Daniel, *Test de razonabilidad y derechos humanos: instrucciones para armar*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 164.

13 Simental Franco, Víctor Amaury, *Argumentación jurídica. Práctica y deontología*, 2a ed., México, Porrúa, 2019, p. 27.

DR. CARLOS MUÑOZ VILLAVICENCIO

MANUAL PRÁCTICO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA



Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com



Manual para la elaboración de tesis
Dr. José Manuel Vargas Menchaca



Enseñanza del Derecho
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado Europeo
Dra. Sara Esteban Cabrera



Valoración Aduanera
Dr. Belam Lammoglia Riquelme



Nuevo Modelo Policial
Mtra. Sandra Regina Hernández Zetina



Historia del Derecho en México
Dra. María Elena Ayala Ensuastegui



Derecho Penal, Parte General
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco
Mtra. Ana Karen Viviana Orozco Calvo



Argumentación Jurídica Práctica
Dr. Sergio Bazán Ortega



El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Mtro. Gustavo Armando Jiménez Pereyra
Mtro. Javier Miranda Villalobos



T-MEC Comentado: Tomo 1, 2 y 3

Adquiere **tu libro**

Contamos con más de **17 libros** para su análisis jurídico



Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía



Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Mtro. José Antonio García Ochoa



Teoría General del Estado
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco



Derecho Procesal Fiscal y Aduanero
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Dr. Carlos Javier Verduzco Reina



Derecho Fiscal Internacional: Tomo 1 y 2
Dr. Hadar Moreno Valdez



Logística Funcional del Comercio Internacional
Mtro. Héctor Díaz Arzola



Manual Práctico de Clasificación Arancelaria
Dr. Carlos Muñoz Villavicencio

Disponibles en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en **librosyrevistascuej.com**

PATENTES A MEDICAMENTOS, UN OBSTÁCULO ANTE LA PANDEMIA DE SARS- COV-2 (COVID-19)



Mtro. Gerardo Hurtado Razo

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en propiedad intelectual e industrial; maestro en Derecho corporativo; actualmente doctorando en derecho aduanero y comercio exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Socio de la firma J. Hurtado, Mendoza & Asociados. Litigante en Derecho corporativo y propiedad intelectual e industrial. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., ANADE. Profesor a nivel licenciatura de Derecho de la empresa, Derecho de la propiedad intelectual, contratos mercantiles, y sociedades mercantiles.

La propiedad intelectual en su área de estudio se divide en dos grandes ramas que protegen a los derechos de autor y la propiedad industrial; mismas que a su vez se dividen en subramas de estudio que se encargan de proteger el ingenio, la innovación y la originalidad de un producto o servicio. Dentro de la protección a las innovaciones que corresponden a la propiedad industrial encontramos a las patentes¹, derecho exclusivo que se le otorga a una innovación al conocimiento humano y al estado de la técnica. Así podemos apreciar que una patente² es asociada por la mayoría de los mexicanos con un medicamento; hoy gracias al manejo de los medicamentos similares, hablar de medicina de patente se volvió más popular entre los ciudadanos; Por esa razón, en estos días de pandemia hablar de una vacuna patentada, ha sido la noticia más importante de los últimos dos años.

En estos dos años ha crecido la polémica sobre la protección que se le otorga a una patente, como la concedida a las diversas vacunas que los laboratorios han registrado para combatir la pandemia de Sars-Cov-2 (Covid-19); en nuestro país, como en la mayoría del mundo, existe una ley que protege este derecho exclusivo, en México es la Ley Federal de

Protección a la Propiedad Industrial, misma que recientemente fue promulgada y sustituye a la vieja Ley de la materia que estuvo vigente más de 2 décadas; leyes que gracias al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC, han dado un lugar primordial a esta materia en el Estado mexicano, y dejó a la vista la importancia que tiene como detonante económico y tecnológico de un país.

Así, encontramos que las patentes se encuentran reguladas en el capítulo II de la actual Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, donde a partir del artículo 45³ encontraremos los aspectos que nos permiten entender e identificar qué protege una patente, y qué es o no patentable. El doctor David Rangel Medina⁴ decía que una patente es un monopolio de explotación de la industria o arte a que se refiere el invento, consistiendo ese monopolio en el privilegio especial que otorga el Estado al creador de una invención que reúna las exigencias legales que establece la Ley de la materia, acreditándose la existencia de tal concesión a través del llamado título de patente, que es expedido por el Poder Ejecutivo, a través de su autoridad competente, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1 Inventar el Futuro, La Propiedad Intelectual y las Empresas; Organización Mundial de la Propiedad intelectual, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf p.1. fuente consultada el día 19 de febrero de 2022.

2 UNCTAD, *La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo*. No. de venta S. II D.6, Nueva York., 1975, pp. 1 y 2. "...es un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo para impedir que otras personas produzcan utilicen o vendan un producto o empleen un procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse pasa al dominio público..."

3 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Véase en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPII_010720.pdf Fuente consultada el día 19 de febrero de 2022.

4 Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1998, p. 23.

A esta figura jurídica la Ley de la materia en su artículo 53 le otorga una protección por 20 años improrrogables. Este derecho exclusivo busca que las personas que realizan la inversión en la investigación y la producción de un producto; que en estos días por su relevancia nos centraremos en las vacunas para la pandemia de Covid-19, medicamentos que durante este año y meses que han transcurrido, son los más solicitados a nivel mundial. Para estos dos meses de 2022, donde la cuarta ola de contagios ha azotado al mundo, la necesidad de vacunas ha sido para todos los países pobres y ricos una necesidad prioritaria; así como ha dejado ver como si un Estado es pobre no tiene acceso rápido a estas, debido a que los países industrializados y con más recursos han acaparado el mercado y para ellos parece que esta pandemia está terminando, mientras que continua para los demás.

Lo cierto es que esta pandemia de Covid-19 llegó para quedarse en variantes que mutarán en formas que pueden ser más ligeras, contagiosas, o agresivas. No podemos predecir si es el inicio del fin de la pandemia, pasando a ser una enfermedad de temporada. No obstante, las patentes medicas continuarán con su protección legal por el término que establezca la Ley⁵ de cada país, conforme a los tratados internacionales firmados.

Pero, lo que sí podemos buscar es que el contenido de nuestra Ley efectivamente sea aplicado en sus excepciones, las cuales para México se han resalta-do durante la pandemia de Covid-19 y la de influenza del año 2009 (AH1N1); hace 10 años vimos por primera vez la posibilidad de solicitar por emergencia sanitaria, que se otorgaran licencias a más laboratorios ante la gran demanda del medicamento que se usó para tratarla (véase cláusula o excepción Bolar).⁶

Jurídicamente los tratados internacionales y la legislación en los diferentes países del mundo, tienen artículos de excepciones que permiten encontrar una solución práctica en favor de preservar la especie; el ser humano ha vivido pandemias y pestes, como la fiebre española y la peste bubónica que han hecho

reflexionar al hombre sobre la importancia de la supervivencia y de cómo preservar la salud en nuestra especie. El artículo 153 de nuestra Ley de la materia establece dicha excepción:

Artículo 153.- El Instituto determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, cuando de no hacerlo así se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, de oficio o a petición de instituciones nacionales especializadas en dicha enfermedad que se encuentren acreditadas ante éste, en la que se justifique las causas de emergencia o seguridad nacional. Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria emitida por el Consejo, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto, quien la otorgará, previa audiencia de las partes y opinión del Consejo, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y de calidad, duración, campo de aplicación de la

5 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Véase en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf Fuente consultada el día 19 de febrero de 2022. Artículo 55.- El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. El alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto por esta Ley.

6 Experiencias y Estudios de Caso de los Estados Miembros sobre la Eficacia de las Excepciones y Limitaciones, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, México, Cláusula o Excepción Bolar, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_23/scp_23_3.pdf https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_23/comments_received/mexico.pdf Fuentes consultadas el día 19 de febrero de 2022.

licencia y la calificación de la capacidad técnica del solicitante; así como el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente, las cuales deberán ser justas y razonables según las circunstancias de cada caso.

La concesión de una licencia de utilidad pública distinta a la prevista en los párrafos segundo y tercero de este artículo se tramitará por el Instituto conforme a lo dispuesto en el artículo 148, segundo párrafo de esta Ley.

Las licencias de utilidad pública no serán exclusivas ni transmisibles y podrán abarcar una o todas las prerrogativas a las que se refiere el artículo 55 de esta Ley.⁷

Si observamos los derechos fundamentales del hombre como son la vida y la salud, concluiremos que son una prioridad a nivel constitucional e internacional. Sin embargo, debemos considerar que los gobiernos muchas veces, ante intereses económicos y políticos, dejan de lado interés jurídico y un derecho humano tan importante.

No sólo la pandemia y la guerra en Ucrania nos deberían hacer reflexionar sobre el interés superior que tiene la vida y la salud sobre otros derechos jurídicos; comparto que el propio derecho al nivel más alto busque la protección de la propiedad intelectual; pero ante otros derechos prioritarios, esté en una balanza de equilibrio y se debe buscar aplicar las excepciones que le otorga la ley de la materia y los tratados firmados internacionalmente.

Nuestra nueva Ley de la materia, debe sufrir una reforma en relación con esta excepción; con el fin de permitir el acceso a patentes como las vacunas del Covid-19, incluso es momento de levantar la voz y pedir a través de los organismos internacionales caminar a una reforma internacional que permita a todos los países un acceso a estas patentes. Si la prioridad es la supervivencia y la salud de la especie humana, hay que buscar que estas patentes lleguen a los países ricos, hasta los más pobres y recónditos del mundo.

La realidad es que, si la pandemia termina para la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y otros países ricos, estamos muy lejos de que esta pandemia por Covid-19 haya terminado para los demás países; y la necesidad de la vacuna no será de alta prioridad para los países pobres del mundo. Por el contrario, este fenómeno de salud ha dejado ver cómo el interés de unos cuantos supera los derechos prioritarios del hombre. Recordemos que no solo fueron las vacunas, si no también los respiradores que eran insuficientes para atender a los enfermos en los hospitales.



⁷ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Véase en: <https://www.diputados.gob.mx/Leyes>

Debemos ser conscientes de que estas dos pandemias no pueden pasar desapercibidas; que tal vez, es el inicio de otras que surgirán y no puede el mundo seguir siendo omiso en esta posibilidad de resolverlo aplicando excepciones por cuestiones de salud y supervivencia de la especie.

Es verdad, que uno de los argumentos que más se habló en los círculos académicos y científicos del mundo, fue que en el mundo no había laboratorios suficientes con las condiciones necesarias y los suficientes suministros para permitir que otros laboratorios, fuera de los titulares de la patente, produjeran las vacunas. Este debate nunca tuvo un fundamento que justificara lo dicho y dejó a la luz los intereses económicos, ya que la propiedad intelectual genera un ingreso prioritario en los países industrializados; debido a que ellos han demostrado que el crecimiento económico de un país, va de la mano con el fomento de la protección a la propiedad intelectual, gobiernos que tienen ingresos por millones de dólares gracias a una correcta protección y fomento entre sus ciudadanos.

Inclusive el pasado primero de marzo del presente año, el poder legislativo ha realizado una reforma a los artículos 225, 226 y 226 bis de la Ley General de Salud, para establecer como obligación la prescripción médica por la sustancia activa de medicamentos; lo que implicará que las recetas medicas tengan prescrito el elemento activo (denominación genérica) y los ciudadanos puedan elegir entre un producto genérico, o uno de marca (signo distintivo) reconocida (que en su momento pudo ser del laboratorio que fue titular de la patente); o uno con una marca registrada de un laboratorio que produce un medicamento con fórmula genérica.

En conclusión: Podemos decir que los bienes intangibles⁸ en el mundo generan más ingresos y valor económico sobre las empresas de lo que se puede imaginar⁹, unos pequeños datos nos permiten ver que las empresas más valiosas del mundo¹⁰, han logrado su valor gracias a la protección de su propiedad intelectual. Por ello debemos ir en busca de una reforma que nos permita aplicar esta excepción de emergencia en beneficio de la supervivencia, la salud

y la vida de nuestra especie, adelantándonos a una posible quinta ola de la pandemia de Covid-19, o en su caso a una futura pandemia a nivel global.

No podemos, dejar de analizar que un interés económico tuvo prioridad sobre un derecho fundamental a la salud y la vida; no sirve de nada proteger por un lado estos derechos fundamentales, si no se tiene la suficiente voluntad y decisión de hacer valer las excepciones que nos otorga el propio derecho a nivel nacional e internacional; no podemos seguir recurriendo a figuras como el amparo para lograr que un tribunal busque una excepción, cuando es tan clara y emana de la propia Ley de nuestra materia, tal como lo hemos comentado.

Tenemos la obligación de ir a un análisis más profundo y buscar una solución justa y equitativa, que permita al derecho aplicar esta excepción y a su vez otorgar una compensación que permita continuar con el fomento a la investigación y su protección. Me atrevo a sugerir que, a los titulares de este derecho, por permitir que otros laboratorios produzcan estas vacunas, se les otorgue como medida de compensación una ampliación en la protección de su patente, adicional al término de 20 años que otorga la ley, después de terminada la emergencia sanitaria y pandemia en el mundo. Lo cierto es que cada año se necesitará vacunar a la población; por ello considero que los titulares que cumplan con la excepción de la ley, se les compense con una ampliación a la protección y puedan recuperar la posible pérdida que sufrieron, al ayudar a terminar de forma más rápida esta pandemia.

8 "¿Qué valor tienen los intangibles?", *Revista OMPI*, diciembre de 2017, número 6, p. 06.pdf Fuente consultada el día 19 de febrero de 2022.

9 Crump, Julian, "Protección de la propiedad intelectual: creación de valor y fomento del crecimiento para las pequeñas empresas", *Revista OMPI*, marzo 2021, número 1, pp. 15 a 19. https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2021/wipo_pub_121_2021_01.pdf Fuente consultada el día 19 de febrero de 2022.

10 Consultora Brand Finance, véase en: <https://brandfinance.com/insights/brands-are-bouncing-back> Fuente consultada el día 19 de febrero de 2022.

OPCIONES FISCALES PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PERSONAS FÍSICAS

Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado

L.C y E.F. por la Facultad de Contaduría y Administración (UNAM). Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo egresado del CUEJ.



En la actualidad es muy común encontrar inmuebles, para uso habitacional o comercial, que se ofrecen en renta. En la mayoría de los casos son personas físicas quienes como propietarios de dichos bienes buscan en el arrendamiento un ingreso extra para mejorar su economía.

Sin embargo, la mayoría de los arrendadores omiten, por desconocimiento o intencionalmente para evitar el pago de honorarios a un contador y de impuestos a la Hacienda Pública, declarar y cumplir con las obligaciones fiscales que les generan estos ingresos. Por ello en el transcurso de este artículo abordaremos las opciones con las que cuentan los arrendadores para cumplir su deber constitucional de contribuir al gasto público y evitar sanciones.

Entendemos como arrendamiento aquel contrato en el que intervienen dos partes, el arrendador (quien otorga el uso o goce temporal del bien inmueble) y el arrendatario (quien recibe el bien inmueble por un tiempo determinado y se obliga a pagar un precio cierto).

El uso del inmueble determinará la afectación de IVA para el arrendador. Es decir, cuando el bien se utilice como casa habitación, conforme al artículo 20 fracción II de la Ley del IVA, el ingreso percibido será exento de dicho impuesto; no así cuando el uso del bien sea comercial en cuyo caso el ingreso percibido por el arrendador se incrementará en un 16 %.

En este orden de ideas el arrendador se ve ante el imperativo de cumplir una serie de obligaciones y requisitos fiscales de manera general:

- a) Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
- b) En el caso de contar con RFC aumentar sus obligaciones fiscales.
- c) Solicitar su firma electrónica.
- d) Elegir el régimen fiscal con el que tributará.
- e) Expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) aun y cuando el arrendatario no solicite comprobante fiscal por el pago de la renta.
- f) Recabar los CFDI correspondientes a las erogaciones que realice que sean estrictamente indispensables para su actividad.
- g) En su caso señalar por separado, en el CFDI expedido, el IVA trasladado y cobrado.
- h) Presentar pagos provisionales de ISR a cuenta del impuesto anual
- i) Enterar en su caso los pagos definitivos mensuales de IVA
- j) Determinar y enterar el impuesto anual.
- k) Presentar mensualmente, en su caso, la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).
- l) Cubrir el impuesto predial.

- m) En caso de contar con trabajadores inscribirlos al IMSS, liquidar los pagos de contribuciones de seguridad social y pagar el impuesto sobre nómina.

A fin de cumplir con la obligación de pagar el ISR el arrendador persona física cuenta con tres opciones, las cuales se mencionan a continuación:

1) TRIBUTAR EN EL RÉGIMEN POR LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

- No hay límite de ingresos.
- Presenta pagos provisionales mensuales o bien trimestrales cuando el arrendador únicamente obtenga ingresos por arrendamiento y estos no sean mayores a 10 SMG elevados al mes.
- Deducir los gastos referidos a pagos de impuesto predial, gastos de mantenimiento, consumo de agua, intereses reales pagados por préstamos utilizados para el inmueble, los salarios, comisiones, honorarios, las primas de seguros que amparen el bien y las inversiones en construcción.
- Con base en el artículo 115 fracción VI, segundo párrafo, de la Ley de ISR, el arrendador tiene la opción de cambiar las deducciones mencionadas en el punto anterior por una equivalente al 35 % ("deducción ciega") del ingreso cobrado sin comprobación alguna.
- Cuando la naturaleza del arrendatario sea de una persona moral, esta le realizará al arrendador una retención del 10 % sobre el importe de la renta.
- Presentar declaración anual con la oportunidad de aplicar las deducciones personales establecidas en el artículo 151 de la Ley del ISR.

2) TRIBUTAR EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)

- Los ingresos obtenidos no podrán superar los 3.5 millones de pesos.

- Presentará pagos provisionales mensuales.
- No se consideran deducciones comprobables ni la "deducción ciega"
- El importe del ISR a pagar se determinará multiplicando el ingreso facturado y efectivamente cobrado, sin deducción alguna, por la tasa del 1 % al 2.5 % en relación con el monto percibido.
- Cuando la naturaleza del arrendatario sea de una persona moral, esta le realizará al arrendador una retención del 1.25 % sobre el importe de la renta.
- Presentar declaración anual sin la oportunidad de aplicar las deducciones personales establecidas en el artículo 151 de la Ley del ISR.

3) USO DE UN FIDEICOMISO

- Su fundamento lo encontramos en el artículo 117 de la Ley del ISR.
- El propietario del bien inmueble funge como fideicomitente, la fiduciaria sería una institución financiera y el fideicomisario podría ser el propio fideicomitente o algún tercero.
- Los pagos provisionales de ISR serán cuatrimestrales.
- La fiduciaria realizará una retención del 10 %, a cuenta de los fideicomisarios, sobre los ingresos cuatrimestrales sin deducción alguna.
- La fiduciaria entregará a los fideicomisarios a más tardar el 31 de enero de cada año el comprobante fiscal de los pagos provisionales efectuados.
- Importante considerar el importe de los honorarios que cobraría la fiduciaria.

Considerando el entorno fiscal actual donde prevalece la fiscalización, no sólo para contribuyentes registrados sino para aquellos arrendadores que no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, quienes podrían evidenciar la omisión de sus obligaciones fiscales al depositar sus ingresos o incluso en juicios civiles contra sus arrendatarios, es importante que de forma espontánea analicen, evalúen y adopten cualquiera de las opciones mencionadas obteniendo así una vida fiscal saludable.



DIPLOMADOS 100% EN LÍNEA



**Diplomado: Juicio Contencioso y
Recurso de Revocación**



**Diplomado:
IVA: Impuesto al Valor Agregado**



**Diplomado:
Derechos Humanos y Amparo en
Materia Administrativa**



**Diplomado:
ISR: Personas Físicas**



**Diplomado:
Derecho Aduanero**

SOLICITA FECHAS DE INICIO
cursos@cuej.edu.mx

 **WHATSAPP**
55 10815944



LA LOGÍSTICA FUNCIONAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Dr. Héctor Díaz Arzola

Doctor de Derecho aduanero y Derecho de comercio exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestro en administración de negocios internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, consultor y director de la firma AJH Consultores en el área de logística y operación aduanera, con 30 años de experiencia en el medio.

En la actualidad la logística internacional ha tomado un papel preponderante en las empresas que se dedican a la producción, importación, distribución y comercialización de productos globales, y en los últimos 10 años se ha intensificado el intercambio comercial a nivel internacional gracias al incremento en los acuerdos internacionales y a la interdependencia de los procesos globales de producción.

Es importante resaltar que debido a los diferentes factores que condicionan el resultado de los esfuerzos por llevar los productos de un país a otro, se requiere de una estricta disciplina que conlleve un conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que el éxito de estas depende primordialmente de lo bien que se hayan realizado las anteriores y también de la comunicación y la visibilidad que exista entre ellas.

La logística comprende los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento, fabricación, movimiento o distribución y venta, desde los proveedores hasta los clientes; que permita obtener una optimización sobre las variables que determinan una ventaja competitiva, ya sean costo, flexibilidad, calidad, servicio e innovación mediante la máxima integración de su estructura organizacional, a través de la adopción de una estrategia de “co-evolución” entre proveedores, gestión interna y clientes; que permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos los eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de total sincronización basándose en el uso de plataformas y

métodos idóneos que permitan un elevado grado de comunicación en tiempo real.

Considerada como una disciplina donde se deben atender los procesos de una manera precisa para evitar gastos no contemplados que impactan directamente en la rentabilidad y la competitividad de las empresas ya que existe una correlación directa en cada uno de estos procesos.

Inicialmente se debe trabajar en un análisis de viabilidad que nos permita identificar plenamente las implicaciones financieras y jurídicas que conlleva la importación de un producto en específico, de esta manera se podría establecer el margen de rentabilidad que se pretende conseguir.

La planeación es fundamental para delimitar las responsabilidades de cada una de las áreas involucradas en la logística y de esta manera determinar los tiempos y acciones que se realizarán para lograr los objetivos con la eficacia y eficiencia que se requiere para lograr los objetivos puntualmente.

Mediante las actividades de coordinación establecer una comunicación asertiva con los socios de negocios involucrados para dar la visibilidad necesaria y hacer entrega de la información requerida para que realicen las actividades que les corresponde, comenzando con el transporte internacional acordando con los proveedores los tiempos de entrega y los tiempos de tránsito.

Tener bien identificados desde el inicio del proceso las implicaciones jurídicas que se deben cumplir para que el proceso de importación se realice sin complicación alguna, gestionar permisos o certificaciones necesarias previamente, considerar el flujo financiero y el espacio necesario en el centro de distribución al que se van a destinar, necesaria la comunicación puntual con el agente aduanal para que tenga considerado el despacho en los tiempos determinados.

Finalmente, y también muy importante, establecer los indicadores de desempeño logístico que se deben lograr en cada uno de los procesos; El monitoreo de estos estándares es necesario para identificar las áreas de oportunidad que se deben corregir de manera inmediata para evitar se siga incurriendo en esas imprecisiones.

En la actualidad es sumamente necesario tomar en consideración todos estos elementos para que la empresa se mantenga dentro de la competitividad exigida por el mercado.

Las empresas que logran implementar la funcionalidad en su logística podrán hacer frente a los grandes retos que en la actualidad se presentan en esta actividad derivado de los grandes cambios que se han generado en el comercio internacional donde el

uso de las tecnologías en los procesos de producción y en el encarecimiento de los costos de transportación y en la escasez de materia prima, además de los problemas políticos internacionales que han puesto en jaque a las empresas. Aunado a ello, el comercio electrónico mediante las plataformas digitales que se han convertido en los principales proveedores de bienes de consumo de la población en la gran mayoría de los países.

Procesos complejos con controles estrictos además de el endurecimiento de las políticas en el comercio exterior en el país con la obligatoriedad de cumplimiento regulatorio, que han hecho más costoso este proceso disminuyendo la rentabilidad para las empresas que terminan por buscar métodos alternativos de cumplimiento que ponen en riesgo la estabilidad del negocio.

La estricta disciplina con la que se debe llevar este proceso nos obliga a estar informados de todos los cambios que se generan tanto a nivel nacional como internacional llevando a cabo estrategias que nos permitan lograr los objetivos.





LOGÍSTICA FUNCIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Dr. Héctor Díaz Arzola

Disponible en:
DIGITAL E IMPRESO

De venta en:
librosyrevistascuej.com

DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA COMO ESENCIA AL DEBIDO PROCESO



Mtro. Jacobo León Silva

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, título obtenido mediante la tesis La privatización de la prisión como medio de reinserción social del delincuente en México. Maestro en Derecho procesal penal, maestro en Derecho procesal civil, especialista en juicios orales. Abogado postulante en Derecho penal y derecho civil, asesor de despachos jurídicos y corporativos, catedrático de las maestrías de Derecho constitucional y sistema acusatorio y juicios orales en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

En México, nos regimos por nuestra Constitución General, pues dentro de la misma se encuentran normados y reconocidos los derechos, principios y prerrogativas que dotan al gobernado certeza y seguridad jurídica por parte del Estado mexicano. En donde, desde una visión neopositivista el artículo primero, párrafo tercero le impone el carácter de obligatorio a las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con el artículo 16 Constitucional, en donde nos establece el principio al debido proceso, y es precisamente de donde partimos para abordar el derecho a la defensa adecuada, ello en virtud que es parte integral del principio al debido proceso.

El derecho de defensa adecuada, como parte central del derecho a gozar de un debido proceso, se encuentra tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 14 de la propia Carta Magna y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como se advierte, es obligación de las autoridades del Estado mexicano tutelar la protección y garantizar el derecho a contar con una defensa adecuada como parte del derecho humano a un debido proceso del que debe gozar toda persona sujeta a un procedimiento penal en todas y cada una de las

etapas que integran el procedimiento y el proceso penal; desde luego se debe de tutelar este derecho de defensa desde el momento de la detención en flagrancia hasta la ejecución de la sentencia, garantizando así, que el procesado se encuentre debidamente representado y no se vulnere su derecho a la libertad por una deficiencia técnica en su ejercicio de defensa.

El derecho humano al debido proceso debe entenderse como un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y busca garantizar que las decisiones de la autoridad no sean arbitrarias. Comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

La defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado sea desplegado a través de un proceso justo. De acuerdo con el texto constitucional dentro del artículo 20, toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y en caso contrario le designará una persona defensora pública, la cual podrá comparecer en todos los actos del proceso.

De la premisa anterior, se desprenden dos axiomas importantes que comprenden el derecho de defensa, el formal y el material, en donde el aspecto formal se satisface con el requisito que el abogado nombrado por una persona conducida al procedimiento ostente el título de licenciado en derecho o abogado u otros análogos que le permitan ejercer la profesión, aunado a que debe de contar con la patente que confiere el Estado para ejercitar de manera legal la profesión de licenciado en derecho, caso concreto cédula por título en trámite o cédula profesional, según sea el caso.

Se advierte así que el aspecto formal se hace patente al momento en el que se comparece a audiencia inicial y se muestra al auxiliar de sala la cédula profesional del letrado en derecho y, posterior, se verbaliza en la sala de oralidad ante la presencia del togado; pero, el aspecto toral y tema de este artículo es, la existencia de una defensa adecuada en su vertiente material.

El aspecto de la defensa adecuada en su vertiente material, sigue dos máximas 1) presencia física y 2) presencia eficaz, esto porque resulta de rigor la presencia del defensor dentro de los actos procedimentales y procesales para velar que aquellos se encuentren dotados de legalidad, preservando con ello el debido proceso del indiciado y, la segunda, la eficacia del defensor se circunscribe a que cuente con conocimientos técnicos tanto de dogmática penal, derecho probatorio, criminalística, criminología, victimología, neurociencias para poder realizar con ello una verdadera estrategia de defensa.

En donde, la estrategia de defensa, no siempre va encaminada a conseguir una absolucón, sino, lograr el mejor resultado con los órganos de prueba que se tengan disponibles ya sea inculpatórios o exculpatórios, puesto que, el abogado penalista hoy en día se enfrenta con una nueva conceptualización de la investigación de los delitos, en el sentido que existen numerosos campos de la ciencia con los cuales los fiscales cuentan a su disposición para llevar a cabo sus investigación, y desde luego, reunir los datos suficientes para conducir a una persona a proceso.

El ejercicio efectivo del derecho humano de defensa adecuada exige de una intervención activa del defensor y no solamente presencial. De esta forma, debe comprenderse que, si desde el inicio del proceso

penal el inculpadó debe contar con la asistencia efectiva del asesor legal, esto es con la finalidad de garantizarle una defensa adecuada, sin que haya razón alguna para que esa efectividad de la defensa se disminuya o reduzca durante el juicio, a lo largo de todas sus etapas procedimentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el solo nombramiento de un abogado para cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica eficaz, por lo que es imperante que el defensor actúe de manera diligente para proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean lesionados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha desarrollado una doctrina garantista del derecho a una defensa adecuada otorgándole un contenido material. Desde el caso *Ártico vs Italia* sostuvo que el Convenio Europeo no está destinado a garantizar derechos teóricos o ilusorios, sino derechos prácticos y efectivos, esto es, que se permita a las partes acceder a ellos, requiriendo para ello **una defensa material y técnicamente efectiva**.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que la defensa y asistencia letrada debe ser efectiva, así encontramos que en el caso *McMann v. Richardson*, refirió que para que el derecho a la asistencia legal garantizado en la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos cumpla su propósito, los acusados no pueden dejarse a la deriva de la asistencia inadecuada y **los jueces deben procurar mantener estándares para la actuación de los abogados que están representando a los acusados en los juicios penales a su cargo**.

Como coinciden los altos tribunales invocados es una tutela judicial efectiva que debe de realizar el Estado para procurar que el gobernado sea debidamente defendido y en donde, incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 121, prevé el hecho que ante un desconocimiento del sistema y capacidad técnica el juzgador, bajo un estricto ejercicio de tutela de derechos podía remover al defensor de su encargo, este paradigma ha sido abandonado. Ahora cuando se advierte una deficiencia técnica por parte del defensor particular, el juzgador previene al indiciado a que reconsidere su asistencia legal y de

continuar en su postura, entonces, el juez de control mandará llamar a la defensoría pública para que asista al defensor particular, y cuando se trate del defensor público que no tenga los conocimientos técnicos suficientes, el juez de control mandará llamar a diverso defensor público para que se haga cargo del asunto, todo bajo la óptica de la tutela efectiva de derechos.

La defensa materialmente adecuada es muy compleja y llena de aristas, como complejo y específico es el procedimiento penal de corte acusatorio adversarial, esto porque en cada estadio del procedimiento y procedimiento se postula de forma diferente, a saber dentro de la audiencia inicial y/o su prorroga se contabilizan al menos diez momentos procesales dentro de acto procesal, desde luego cada momento conlleva su especificidad y es en donde se advierte el conocimiento técnico de las partes, no por lo profundo y largo de su intervención, sino sobre lo práctico y eficaz de su desarrollo dentro de la audiencia, pues la eficacia no se mide con base en tiempo, sino en resultado.

Como se advierte a lo largo del procedimiento y proceso penal, la intervención del defensor es complicada, tan complicada que hay ocasiones que lo más difícil que les cuesta a los defensores es guardar silencio cuando no se debe emitir ninguna manifestación, ya que las peticiones formuladas por estricto apego normativo son improcedentes, desde luego, ello estriba en el conocimiento sustantivo y adjetivo con los que cuenta el defensor.

Sin lugar a dudas, la audiencia que mayor exigencia técnica requiere es la audiencia de juicio oral, en su primer segmento respecto al desfile probatorio, esto se afirma porque inclusive el propio Código Nacional adjetivo le permite al defensor contar con asesores técnicos para el deshago de las testimoniales o periciales, según sea el caso, por ello el defensor más eficaz es aquel que cuenta con su equipo conformado de especialistas en las diversas áreas de las ciencias forenses porque a través de un correcto ejercicio de contradicción.

En definitiva, ser defensor en el sistema acusatorio exige horas de estudio, actualización constante y sobre todo compromiso con sus causas a defender, porque se debe de tutelar los derechos de forma efectiva, promover actos de nulidad, preparar los

juicios al más estilo norteamericano con sus famosos mock trial, que no es otra cosa que simular los posibles escenarios que pudiera adoptar el juicio, y es por ello que me atrevo a afirmar que ser defensor en el sistema acusatorio no es para todos, es para los verdaderos penalistas.



Conoce nuestras Maestrías

Maestría en **Derecho Aduanero
y Derecho de Comercio Exterior**



Maestría en **Sistema Acusatorio
y Juicios Penales Orales**

Maestría en **Derecho Fiscal
y Administrativo**



Maestría en **Derecho Civil
y Familiar**

Maestría en **Derecho
Constitucional**





"Lo que
hacemos juntos
es lo que
nos distingue"

CONOCE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

LICENCIATURA

LICENCIATURA EN DERECHO
RVOE: 20211348

ECEX

**TRÁFICO DE MERCANCÍAS
Y TRAMITACIÓN ADUANAL**
18FT234 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018

MAESTRÍAS

**MAESTRÍA EN SISTEMA ACUSATORIO
Y JUICIOS PENALES ORALES**
RVOE: 20150061

**MAESTRÍA EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR**
RVOE: 20150103

**MAESTRÍA DERECHO CIVIL
Y FAMILIAR**
RVOE: 20181226

**MAESTRÍA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL**
RVOE: 20150104

**MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL
Y ADMINISTRATIVO**
RVOE: 20121644

DOCTORADOS

DOCTORADO EN DERECHO
RVOE: 20130002

**DOCTORADO EN DERECHO ADUANERO
Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR**
RVOE: 20192323

DIPLOMADOS EN LÍNEA

DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO
DIPLOMADO EN ISR PERSONAS FÍSICAS
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y
AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DIPLOMADO EN JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL Y RECURSO
DE REVOCACIÓN

CERTIFICACIÓN

**EXAMEN ÚNICO DE BACHILLERATO
EXAMEN ÚNICO DE SECUNDARIA**



CAMPUS | BAJA CALIFORNIA
(664) 200 2770
(664) 684 2303

CAMPUS | VERACRUZ
229 3753 434
229 37 52 431

CAMPUS CENTRAL | CDMX
555575 9840
555672 2020

WhatsApp
55 1081 5944 - 55 8202 9064 - 55 3964 7158 - 56 2669 6344 - 55 8202 5967



NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDAS EN CASILLAS Y DE ELECCIÓN EN MATERIA ELECTORAL

Mtra. Dafne Rosales Rodríguez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, maestra en Derecho constitucional egresada del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Se ha desempeñado en áreas jurídicas como abogada de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas N°5 en pensiones del ISSSTE, actualmente se desarrolla como auxiliar jurídico, realizando el seguimiento de las acciones de inconstitucional en materia electoral, así como coadyuvando en el proceso de elaboración de sentencias relevantes de cortes extranjeras, en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer a los lectores información actual y relevante respecto al sistema de nulidades en México, los cuales tienen su origen en los principios constitucionales que están vinculados con el resultado y la calificación de los comicios, que tienen como propósito lograr la representación de la ciudadanía en los diferentes cargos de elección popular.

La importancia del sistema de nulidades reside en la tutela de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen el proceso electoral en las elecciones y así, pueda considerarse democráticamente válida por lo que una de las consecuencias que derivan de su inobservancia es la sanción consistente en determinar la nulidad de un voto, la votación recibida en casilla o incluso de la elección.

Lo anterior, ya que los principios constitucionales que rigen el proceso electoral deben ser cumplidos tanto por las autoridades electorales, como por los partidos políticos, candidatos independientes, funcionarios y la ciudadanía, debido a que son disposiciones de orden público y de observancia general.

LA NULIDAD ELECTORAL

Es el instrumento de sanción legal, que priva de eficacia a la votación total recibida en una casilla o a una

elección, cuando no reúnen los elementos mínimos que le dan validez o cuando no se respetan las reglas esenciales de los comicios.

I. EXISTEN DOS TIPOS DE NULIDAD:

- De votación recibida en casilla.
- De una elección.

En el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se definen las causales de la votación recibida en casilla como las siguientes:

- A)** Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;
- B)** Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;
- C)** Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

- D)** Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;
- E)** Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- F)** Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;
- G)** Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;
- H)** Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;
- I)** Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;
- J)** Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;
- K)** Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Las nulidades se clasifican de dos maneras: las **causales específicas**, que son supuesto concreto que actualizan las causales establecidas en el artículo 75 inciso a al k de la LGSMIME.

Las **causales genéricas** son aquellos supuestos donde la ley no especifica una determinada acción. Por ejemplo: que falte un número importante de boletas en la urna, o que dos funcionarios de casilla se hayan ausentado de la casilla dos horas durante la jornada electoral. En ambos casos, las causales deben ser determinantes.¹ Si se declara que lo son,

se considerarán como motivos graves que afectan el resultado final de la casilla.

II. LA INVALIDEZ DE UNA ELECCIÓN

Se configura porque existe una violación o incumplimiento de principios constitucionales antes citados como lo son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En ese sentido, el TEPJF ha establecido que con las causales de invalidez por violaciones constitucionales un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere la CPEUM, cuando no se ajusta a los elementos previstos en ella, ni es factible reconocer efectos Jurídicos, sino por el contrario debe ser privado de ellos.

En elecciones para diputaciones, las causales serán cuando no se instale el 20 % o más de casillas, o cuando dos integrantes de la formula de candidatos con constancia de mayoría sea inelegible. Pero con la reforma del 2014 al artículo 41, apartado D fracción VI, de la CPEUM, si la causal excede el gasto de campaña de 5 % del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa a tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, pueden actualizarse en tres supuestos, las graves, se entenderán como aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales que pongan en peligro el resultado de la elección.

Las violaciones *formales* son las que afecten normas y principios jurídicos relevantes a un régimen democrático para el proceso electoral. Las dolosas se calificarán como aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito en los resultados del proceso electoral. Y serán *determinantes* las violaciones cuando tengan una diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5 %.

Para que se configure la causal de nulidad de elección en un proceso electoral federal o en una entidad federativa, invariablemente el órgano jurisdiccional respectivo tendrá que declarar la nulidad de la elección.² Ello, porque para verificar si la infracción al principio o precepto constitucional

¹ Jurisprudencia 39/2002.-NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.

² SUP-REC-1048/2018. —Recurrente: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Sala Regional Toluca correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral Plurinomial con sede en la Ciudad de Toluca de Lerdo. - 31 de agosto de 2018. —Unanimidad de votos. —Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretariado: Isaías Trejo Sánchez y Ernesto Camacho Ochoa. Colaboró. Erica Amezcuita Delgado y Cruz Lucero Martínez Peña.

resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para anular la elección de que se trate, se deben verificar las condiciones de apreciar si vulnera un principio o precepto constitucional.

De lo antes citado, se concluye que, en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuenta con atribuciones para anular la votación recibida en casillas o en su caso, declarar la nulidad de la elección. Sin embargo, aquellas elecciones cuyos cómputos, constancias de validez, mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, serán consideradas válidas, definitivas e inatacables.

Cabe decir que la nulidad de votación recibida en casilla tiene por objeto que el día de la jornada electoral, se celebren las elecciones conforme a lo que establece la CPEUM, es decir, que todos los actos y resoluciones que se realicen estén apegados a derecho. El sistema de nulidades en materia electoral federal se rige por diversos principios que surgen de la Ley Suprema y de la interpretación constante que realiza el TEPJF, al resolver casos con motivo de las diferentes elecciones tanto en el ámbito federal como local.

Los supuestos de nulidad de votación recibida en casilla plasmados en la LGSMIME, representan una

respuesta a las diversas irregularidades que se presentan el día de la jornada electoral surgidas con motivo de los comicios, sin embargo, los criterios del TEPJF establecen que todos los supuestos de nulidad se deben de acreditar, y que la irregularidad debe ser determinante para el resultado final de la votación recibida en casilla.

Además, de las nulidades antes descritas, también se encuentran otras nulidades, como lo es, la compra del voto y violencia política de género. Esta causal de violencia política hacia las mujeres, es importante mencionarla, ya que, en las pasadas elecciones del 6 de junio de 2021, se pudo notar una amplia participación femenina, por tal motivo es necesario seguir apoyando la igualdad entre hombres y mujeres, debido a que se han visto muy buenos resultados relacionados con la paridad de género.

Finalmente, considero que se debería de agregar la causal de nulidad específica de “violencia política de género”, porque aun y con los avances que se han tenido respecto a la violencia contra la mujer, sigue habiendo denuncias de campañas sistemáticas de acoso y violencia hacia en el género femenino, por lo que invito a los lectores y a la ciudadanía a tomar conciencia para poder hacer de nuestro país un lugar más justo e igualitario.



ESTUDIA TU DOCTORADO EN DERECHO ADUANERO Y DERECHO DE COMERCIO EXTERIOR

SEMESTRAL RVOE 20192323

CONSULTA NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
WWW.CUEJ.EDU.MX



LA CRISIS DE LOS CONTENEDORES Y LA NUEVA REALIDAD DEL MUNDO



Dr. Carlos Alfaro Miranda

Doctor en Derecho aduanero y Derecho de comercio exterior por el CUEJ. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia aduanera, de 2001 a 2016 laboró en diversas áreas de la Administración General de Aduanas, en este momento participa activamente como estratega en planeación de soluciones de comercio exterior y aduanas, en Almanza Villarreal Grupo de Logística Internacional.

La pandemia derivó en una situación llamada crisis de los contenedores que afectó el comercio exterior e impactó irremediablemente y para siempre la función que se desempeña para los involucrados en este tipo de comercio, sean las empresas importadoras o exportadoras, sean los funcionarios de los recintos aduaneros o los agentes aduanales, incluso, el cliente final ya no es el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se tratará la crisis de los contenedores y su afectación en México, que ha generado la concepción de una nueva realidad a la que debemos adaptarnos los actores del comercio exterior lo más pronto posible.

Derivado de la situación de pandemia de COVID-19 que alcanzó al mundo a finales de 2019 y que tuvo un impacto muy profundo en la humanidad, dañando la salud de millones de habitantes, algunos con alcances fatales, siendo esto muy lamentable, la afectación ha ido más allá de la situación de salud; ha alcanzado a la economía, logística, productividad, comercio y demás sectores ocasionando que la suma de hechos nos hayan llevado a una situación de encontrar un mundo distinto al que se tenía previo al 2019,¹ con crisis de salud, económica y, ahora en 2022, crisis de seguridad alimentaria mundial y de energéticos.² El mundo ha cambiado y es necesario que la población también lo haga; las empresas, la industria y, en general, el comercio mundial y, para lograr adaptarse, en el caso del comercio, todos los actores debemos ser proactivos, para prever en vez de sólo ser reactivos.

Se puede añadir que se han tenido distintas variables o factores que han llevado al cambio en cómo se percibe la realidad. En el caso de México es, además de la pandemia, la llegada de un nuevo sistema de gobierno, de políticas distintas que han enfocado su atención en los problemas de corrupción que hay en el país, señalando, entre otros, a las aduanas como sitios donde los problemas de este tipo han ocasionado un mal manejo de los recintos aduaneros, que llevaron al Estado a crear, de entre todas sus estrategias, una donde se cambian los mandos de cada una de las ahora 50 aduanas del país, por mandos militares, quienes el gobierno considera de más probidad que los funcionarios pasados. Aunque también llegan con un apoyo de fuerzas de seguridad para evitar la extorsión de los funcionarios por parte de las bandas delictivas, que llegó a tenerse como factor corruptivo que sometía a algunos funcionarios aduanales y; finalmente, con un cambio legal que dota a las aduanas de independencia jurídica de las otras instancias del gobierno federal, ahora ya no son un apéndice del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora es una institución de un nivel paralelo, aunque con muchas responsabilidades de comercio exterior.

La suma de variables, efectivamente han llevado a que cambie la realidad, que el mundo ya sea distinto y que los funcionarios aduanales, las empresas de comercio exterior, los agentes aduanales, las propias secretarías del gobierno, adicional de los clientes finales, aquellos que esperan su bien, servicio, parte o mercancía para su uso o disfrute. Cada uno ha tenido la necesidad de cambiar y adaptarse a la nueva realidad.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística. CEPAL. 06/08/2020. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
2 Consejo Europeo (CE). Respuesta de la UE ante la invasión rusa de Ucrania. 24-25/03/2022. <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/>

Pero se tiene un factor que ha venido afectando al comercio mundial, la crisis de los contenedores.³ Esta crisis comenzó posterior a las políticas de distanciamiento social y el detener la actividad productiva, comercial y económica del mundo, en una situación que llevó a la mayoría de empresas a cerrar sus puertas para evitar que se acelerara la propagación de la enfermedad de COVID-19 y ese acto rompió el funcionamiento de las cadenas productivas, de valor y de distribución que llevó a la situación de escasez de bienes y servicios para un mundo de más de 7 mil millones de personas y millones de empresas que tenían distintas necesidades llevando a una situación de inflación y alta demanda de productos.

Lo anterior porque las empresas no tenían el permiso del gobierno de enviar sus mercancías, de que las fábricas no podían echar en marcha las cadenas productivas, por lo tanto, era complicado tener productos terminados en cada industria del mundo. Luego, aunque se tenían los productos listos para ser enviados a sus distintos lugares, la logística, por la misma situación de distanciamiento social y el detener toda actividad laboral, no se tenía transporte suficiente para llevar los insumos o mercancía a sus destinos.

En el caso de las embarcaciones y los puertos se tenían trabajando a media capacidad. Esto llevó a una acumulación en esos lugares de los contenedores, que no podían ser enviados en los tiempos normales y, las embarcaciones y los buques cargueros también tenían que laborar con menos personal del necesario para cumplir cabalmente con sus funciones. Fue el inicio de la crisis de contenedores que afectó la logística y distribución en el mundo. Por otra parte, si los puertos estuvieron trabajando con menores capacidades que las necesarias, si había menos transportistas laborando, algunos por el distanciamiento social impuesto por cada uno de los gobiernos, otros por haber sido afectados por la enfermedad, entonces no había las condiciones suficientes para cumplir con la función de llevar los contenedores de los puertos de destino a sus lugares de entrega final. Durante esta situación hubo países que fueron recuperando su movilidad y fuerza productiva gracias a su control de la pandemia.

Es de saber que el primer país que recuperó gradualmente su movilidad y productividad fue China, derivado de sus estrictas medidas de control social. Al ser de los primeros países en poder recuperar su productividad le condujo a reiniciar sus procesos de exportación utilizando todos los medios de transporte disponible, principalmente las embarcaciones o buques cargueros. Es de esperar que, el comercio debía ser impulsado nuevamente y era necesario acelerar las entregas porque había personas, empresas y fábricas en todo el mundo que requerían sus productos en sus manos. Se botaban los barcos con miles de contenedores al mar, hacia Europa y América, pero estos buques cargueros llegaron a puertos congestionados porque en cada uno de los destinos la pandemia seguía afectando la movilidad social y, en consecuencia, la actividad económica, productiva y de transporte terrestre; ocasionando los cuellos de botella en puertos, para la descarga de los contenedores; en las carreteras, porque no había transportistas suficientes y, en el mar porque se tenían las rutas congestionadas por barcos esperando descargar... Esto profundizó la escasez en el mercado. Por un lado, con los buques cargueros varados o en espera en los distintos mares Pacífico y Atlántico, con contenedores sin poderse descargar; otros de ellos ya en puertos, pero sin poder dirigirse a su destino en tierra, con una población mundial y empresas manteniendo sus necesidades presentes y levantando compras o buscando sus insumos, fue ocasionando que los precios se incrementaran, en el costo de transporte, sobre el uso de los contenedores, incluso, a inicios del 2022 con un incremento en el costo de los combustibles por una situación de guerra entre dos países en Europa, se han venido presionando los precios de las mercancías, impactando el precio para el consumidor final.

Según perspectivas sobre la situación de la llamada crisis de los contenedores se espera que los mencionados cuellos de botella en los principales puertos de Estados Unidos y de Europa se terminen después de la primera mitad del año 2022, esto indica que los problemas se mantienen en el presente, aunque se han venido abriendo gradualmente, incluso afectando a las empresas donde empiezan a llegar más

3 BBC News Mundo. Qué es la crisis de los contenedores y cómo afecta al comercio mundial y a tu bolsillo [VIDEO]. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Rm8ulgsEaPk>

contenedores con materia prima que los que pueden gestionar en sus procesos de producción.

En el caso de algunos puertos de México como Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, los problemas de la crisis de los contenedores sigue presente y ha ido profundizándose en algunos casos, dadas las mediciones de carga, descarga y estadías de los contenedores, esto ha ocasionado presión y, en similar situación están en el resto de los puertos mexicanos. Esto significa saturación, que deriva en un retardo en la salida de los contenedores a sus destinos final.

Si en tiempos normales la salida de los contenedores alcanzaba los siete días máximo, con la saturación se están teniendo casos de hasta 14 días para que el contenedor salga de puerto a su destino final en México. Esto significa atrasos que afectan a todas las cadenas de suministro que necesitan que sus mercancías y partes lleguen a su destino lo más pronto posible.

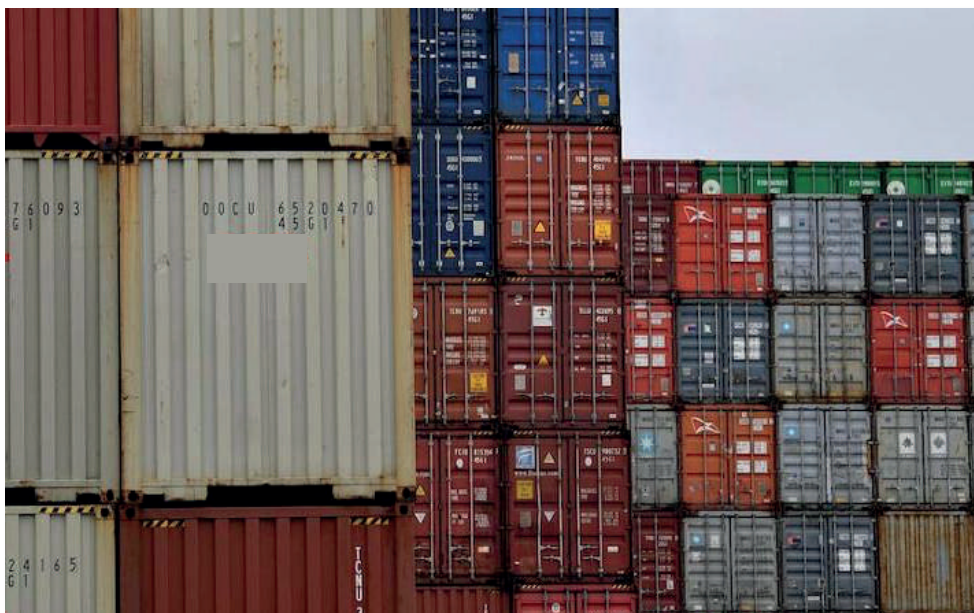
Así, si una maquiladora tenía pedidos de partes en distintas empresas del mundo, sus contenedores no llegaron en tiempo por la pandemia y la crisis de contenedores, retrasándose. Pero ya que se empieza a agilizar el trabajo en puertos y se pueden llevar en el transporte terrestre, la cantidad de contenedores que llegan a las empresas, maquiladoras y fábricas, a tal cantidad que estos establecimientos no pueden

gestionar todos esos contenedores, ocasionando una saturación de trabajo que lleva a que los contenedores se mantengan detenidos en las empresas.

La situación que está pasando la industria incrementa los costos en todos los sentidos, sean de recursos humanos, financieros, de logística y distribución y de atención de las cadenas de suministros. Si a lo anterior se le suman los costos del incremento de combustibles y energía eléctrica, entonces se obliga a que los empresarios tengan que trasladar esos cargos a los consumidores finales, teniéndose así un factor más que somete la presión de la inflación en México.

Teniendo todo lo comentado se entiende la nueva situación, el cambio de realidad al que debemos adaptarnos, lo inteligente no es el buscar solucionar problemas que se presenten, sino previniéndolos, ejercer acciones de inteligencia y prevención en las empresas exportadoras e importadoras para lograr estar un paso delante de los problemas.

Así, es importante que los actores del comercio exterior comencemos a prepararnos para un futuro de regionalización del comercio; adicionalmente: es de entender que las cadenas productivas serán más viables si se encuentran en la misma región para evitar los impactos como los tenidos por la pandemia y la consecuente crisis de los contenedores, los involucrados en el comercio exterior tenemos que romper con el pensamiento del pasado, el mundo ha cambiado y, nosotros, con la responsabilidad que tenemos por mantener un comercio exterior sin complicaciones, debemos aprender a adaptarnos, teniendo en cuenta que será importante el mejor manejo de cada una de nuestras funciones para hacer lo que nos corresponde con calidad, compromiso, responsabilidad, pero sin olvidar que debemos prever los problemas antes de que aparezcan, debemos ser previos y no reactivos, haciendo esto nuestra labor será en beneficio de las empresas que representamos y contribuiremos así a un mejor comercio exterior.





**AGENCIA
ADUANAL**



**SERVICIO DE
TRANSPORTE**



**UNIDAD DE
VERIFICACIÓN**



**ALMACEN GENERAL
DE DEPÓSITO**



**DEFENSA LEGAL
Y CONTABLE**



DACIS

AGENCIA ADUANAL S.C.

 **www.dacis.com.mx**

CONTACTO

Begonias #18, Col Clavería Alcaldía Azcapotzalco,
CDMX C.P. 02080.

contacto@dacis.mx

(55) 5341 4041 | (55) 6650 6454